

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN PRIMERA  
SUB SECCIÓN B**

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**Magistrado Ponente:** OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS  
**Expediente:** No. 250002341000200200456 – 00  
**Demandante:** TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN  
VALTRONIK S.A  
**Demandado:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL  
MEDIO AMBIENTE  
**Referencia:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL  
DERECHO – INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN  
DE PERJUICIOS  
**Asunto:** CONCEDE APELACIÓN

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 344 cdno. ppal.), el  
Despacho **dispone:**

Por ser procedente al tenor de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, **concédense** en el efecto suspensivo ante el Consejo de Estado los recursos de apelación interpuestos por la apoderada judicial de la Secretaría Distrital de Ambiente (fls. 307 a 310 ibidem) y por el apoderado judicial de la sociedad Tecnología y Comunicación Valtronik S.A. (fls. 312 a 338 ibidem), contra la providencia proferida el 2 de junio de 2022 (fls. 251 a 301 ibidem), mediante la cual se declaró probada parcialmente la objeción al dictamen pericial y se liquidó la condena en abstracto proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2014.

Ejecutoriado este auto y previas las constancias del caso, **remítase** el expediente al superior.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS**  
**Magistrado**  
**Firmado Electrónicamente**

*Expediente No. 250002324000200200456-01*  
*Demandante: Tecnología y Comunicación Valtronik S.A*  
*Nulidad y Restablecimiento del Derecho*  
*Incidente de Nulidad de Perjuicios*

**Nota:** La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente que conforma la Subsección "B" de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de CPACA.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN PRIMERA  
SUB SECCIÓN B**

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**Magistrado Ponente:** OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS  
**Expediente:** No. 250002324000201000768-01  
**Demandante:** HOLCIM (COLOMBIA) S.A  
**Demandado:** ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y OTROS  
**Referencia:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**Asunto:** CONCEDE APELACIÓN

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 609 cdno. ppal.), por ser procedente al tenor de lo dispuesto en los artículos 181 del C.C.A., modificado por el artículo 57 de la ley 446 de 1998, y 212 ibidem **concédese** en el efecto suspensivo ante el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandante (fls. 602 a 607 vlto. cdno. ppal.), contra la sentencia proferida el 16 de junio de 2022, por este Tribunal, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda (fls. 456 a 595 ibidem).

Ejecutoriado este auto y previas las constancias del caso, **remítase** el expediente al superior.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS**  
**Magistrado**  
**Firmado Electrónicamente**

**Nota:** La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente que conforma la Subsección "B" de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de CPACA.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JURISDICCIONAL  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN "A"**

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022)

**PROCESO No.:** 2500023410002015-00754-00  
**MEDIO DE CONTROL:** REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO  
**DEMANDANTE:** AYDEE SÁNCHEZ SALAZAR Y OTROS  
**DEMANDADA:** SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
**ASUNTO:** OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO- FIJA FECHA

**Magistrado Ponente  
FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA**

**1. ANTECEDENTES**

La señora Aydee Sánchez Salazar y otros presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo contra la Superintendencia Nacional de Salud.

Mediante Auto del 8 de julio de 2015 el Despacho del Magistrado Ponente dispuso admitir la demanda de la referencia ordenando las notificaciones de Ley y recibiendo pronunciamiento de la Superintendencia Nacional de Salud quien propuso excepciones previas de inepta demanda, inexistencia del grupo uniforme y caducidad.

De manera posterior, mediante Auto del 26 de enero de 2017 se declaró probada la excepción de inexistencia del grupo uniforme, al haberse probado la inexistencia del demandante y se decretó la terminación del proceso.

Contra la anterior providencia la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el H. Consejo de Estado mediante providencia del 13 de octubre de 2020 dispuso revocar el mencionado auto al considerar que el demandante afirmó que el grupo estaba conformado por los afiliados a Saludcoop EPS entre abril de 2013 y marzo de 2015 y que según la base de datos aportada correspondía a 122.019 afiliados que no recibieron servicios médicos de manera oportuna, razón por la cual el

EXPEDIENTE: 2500023410002015-00754-00  
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO  
DEMANDANTE: AYDEE SÁNCHEZ SALAZAR Y OTROS  
DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE- FIJA FECHA PARA AUDIENCIA

demandante si había identificado a las personas presuntamente afectadas por los hechos vulnerantes y suministró los criterios que permiten identificar a los integrantes, cumpliendo entonces con el requisito de integración al grupo.

## **2. Caso concreto:**

### **1º. Obedecimiento a providencia del superior:**

Con base en lo anteriormente expuesto, el Despacho procederá a obedecer lo dispuesto por el H. Consejo de Estado, siendo del caso no realizar control de legalidad, en tanto que el superior ha señalado que el problema jurídico deberá ser resuelto de fondo.

### **2º. Auto complementario por medio del cual se pronuncia sobre la excepción previa de caducidad de la acción:**

La etapa procesal subsiguiente es la de convocar a audiencia de conciliación, sin embargo, es lo cierto que se encuentra pendiente de resolver la excepción de caducidad formulada por la Superintendencia Nacional de Salud.

Al respecto, vale la pena aclarar que la caducidad no es una excepción previa, conforme a lo señalado en el artículo 100 del Código General del Proceso:

**ARTÍCULO 100. EXCEPCIONES PREVIAS.** Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:

1. Falta de jurisdicción o de competencia.
2. Compromiso o cláusula compromisoria.
3. Inexistencia del demandante o del demandado.
4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.
6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.
7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.
8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.
10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.

EXPEDIENTE: 2500023410002015-00754-00  
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO  
DEMANDANTE: AYDEE SÁNCHEZ SALAZAR Y OTROS  
DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE- FIJA FECHA PARA AUDIENCIA

11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.

Ahora bien, el legislador ha previsto dos oportunidades para pronunciarse sobre la caducidad del medio de control, a saber: **(1) la admisión de la demanda**. El artículo 90 del CGP dispone que el medio de control será rechazado cuando haya operado la caducidad del medio de control; y, en la actualidad, la sentencia anticipada, en los términos del artículo 278 del Código General del Proceso que señala:

**ARTÍCULO 278. CLASES DE PROVIDENCIAS.** Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.

Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.

**En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:**

1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.

**3. Cuando se encuentre probada** la cosa juzgada, la transacción, **la caducidad**, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa.

El despacho no ha encontrado probada la caducidad al momento de proferir el auto admisorio de la demanda, etapa que ha precluido en el presente trámite procesal.

Correspondería al magistrado sustanciador llevar la decisión a la Sala de Decisión, siempre que estuviese probada la caducidad del medio de control, sin embargo, se observa que la presentación oportuna de la demanda es uno de los requisitos para dar inicio al proceso jurisdiccional contencioso administrativo, siendo definida la caducidad como la extinción de la posibilidad de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente fijado por la Ley.

Tratándose del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, la caducidad está definida en el artículo 47 de la ley 472 de 1998, que a la letra dice:

**ARTICULO 47. CADUCIDAD.** Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo.

EXPEDIENTE: 2500023410002015-00754-00  
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO  
DEMANDANTE: AYDEE SÁNCHEZ SALAZAR Y OTROS  
DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE- FIJA FECHA PARA AUDIENCIA

Así mismo considera que despacho que dicha disposición ha sido complementada por la ley 1437 del 2011, cuando regula la caducidad del medio de control, en la siguiente forma:

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

Artículo 164 h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados a un grupo, **la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño.** Sin embargo, si el daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo;

Tal como se puede observar, en el caso sometido el daño se deriva de la omisión en la prestación del servicio de salud a personas indeterminadas. Sin embargo, será en la sentencia, la oportunidad de resolver si el daño es común, si fue continuado o de ejecución sucesiva, y la oportunidad de identificar a los integrantes del grupo de demandantes.

Lo cierto es que la parte demandante ha señalado que la omisión se produjo hasta un tiempo muy próximo a la fecha de presentación de la demanda, lo que conlleva afirmar que la excepción de caducidad del medio de control, no prospera.

Así las cosas, estas razones son suficientes para determinar que dicha excepción no prospera y continuar con el trámite del proceso.

### **3º. Impulso procesal: Audiencia de Conciliación:**

La etapa subsiguiente es la conciliación:

**ARTICULO 61 LEY 472 DE 1998. DILIGENCIA DE CONCILIACION.** <Ver Notas del Editor> <Incorporado en el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, artículo 85.> De oficio el juez, dentro

EXPEDIENTE: 2500023410002015-00754-00  
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO  
DEMANDANTE: AYDEE SÁNCHEZ SALAZAR Y OTROS  
DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE- FIJA FECHA PARA AUDIENCIA

de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término que tienen los miembros del grupo demandante para solicitar su exclusión del mismo, deberá convocar a una diligencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes, que constará por escrito.

La diligencia deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de convocatoria. No obstante, en cualquier estado del proceso las partes podrán solicitar al juez la celebración de una nueva diligencia a efectos de conciliar sus intereses y poner fin al proceso.

En la diligencia podrá participar el Defensor del Pueblo o su delegado, para servir de mediador y facilitar el acuerdo; si el Defensor hubiere presentado la demanda, dicha función corresponderá al Procurador General de la Nación o su delegado, quien obrará con plena autonomía. En la audiencia también podrán intervenir los apoderados de las partes.

El acuerdo entre las partes se asimilará a una sentencia y tendrá los efectos que para ella se establecen en esta ley. El acta de conciliación que contenga el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

El juez ordenará la publicación del acuerdo de conciliación en un medio de comunicación de amplia circulación nacional.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Despacho

## RESUELVE

**PRIMERO:** **OBEDÉZCASE** lo resuelto por el Honorable Consejo de Estado en providencia del trece (13) de octubre de dos mil veinte (2020), mediante la cual se revocó el Auto del 26 de enero de 2017 con el que se declaró probada la excepción de inexistencia del grupo uniforme propuesta por el apoderado de la Superintendencia Nacional de Salud.

**SEGUNDO. -** **DECLÁRASE** no probada los elementos señalados por la ley para disponer la terminación del proceso con sentencia anticipada, en la cual se aborde el estudio de la excepción de caducidad del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo propuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, por las razones anotadas en la presente providencia.

**TERCERO. -** Como consecuencia de lo anterior, **FÍJASE** como fecha para la celebración de audiencia de conciliación el día **MARTES TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)** a partir de las **DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA (10:30 A.M)** a través de la plataforma Teams de Microsoft Office 365. La diligencia se llevará a cabo en los términos y con los propósitos previstos en el artículo 61 de la Ley 472 de 1998.



EXPEDIENTE: 2500023410002015-00754-00  
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO  
DEMANDANTE: AYDEE SÁNCHEZ SALAZAR Y OTROS  
DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
ASUNTO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE- FIJA FECHA PARA AUDIENCIA

Se advierte a las partes que deben concurrir a la presente diligencia a que según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, su inasistencia constituirá causal de mala conducta sancionable con destitución del cargo. Al demandante se le advierte que su no comparecencia a la audiencia lo hace incurrir en el comportamiento señalado en el artículo 44 del Código General del Proceso, y podrá ser sancionado con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El Despacho a través de correo electrónico del Magistrado sustanciador creará el enlace web de la audiencia que será puesto en conocimiento de las partes y del señor agente del Ministerio Público.

**CUARTO. - REQUIÉRASE** al abogado coordinador y a los apoderados de las autoridades accionadas para que con antelación a la celebración de la diligencia de conciliación procedan a indicar al Despacho los correos electrónicos con los cuales comparecerán a la citada diligencia. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 2213 de 2022.

**QUINTO.-** En el evento de que no haya ánimo conciliatorio, en la misma diligencia, en audiencia concentrada, se proseguirá con la fase probatoria y se adoptarán las decisiones que a que haya lugar.

**SEXTO. -** Por Secretaría **CÍTASE** a las partes y al señor Agente del Ministerio Público a la diligencia de conciliación.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Firmado electrónicamente  
**FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA**  
**Magistrado**

La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI, por el Magistrado Felipe Alirio Solarte Maya. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JURISDICCIONAL  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN A

Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintidós (2022)

**PROCESO N°:** 2500023410002015-01034-00  
**MEDIO DE CONTROL:** REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO  
**DEMANDANTE:** BELKIS PACHECHO CRESPO Y OTROS  
**DEMANDADO:** NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS  
**ASUNTO:** CONCEDE APELACION

**MAGISTRADO PONENTE**  
**FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA**

Teniendo en cuenta el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a pronunciarse sobre el recurso de apelación elevado por el apoderado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la apoderada Olga del Rosario Rada González contra la sentencia proferida por este Tribunal el 3 de junio de 2022.

1. Mediante sentencia del 3 de junio de 2022 se dispuso:

**“PRIMERO: DECLÁRASE** no probada la excepción de caducidad formulada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., por las razones expuestas en la presente providencia.

**SEGUNDO: DECLÁRASE** probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, por las razones expuestas en la presente providencia. En consecuencia, la Sala se abstiene de estudiar las excepciones denominadas “inexistencia de vulneración de derechos e intereses colectivos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho”, “imposibilidad de imputación jurídica eficiente en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho”, “improcedencia de atribuirle responsabilidad al Ministerio de Justicia y del Derecho por vía de la adscripción de la Dirección Nacional de Estupefacentes” y que el Ministerio de Defensa Nacional señaló como excepción la denominada “cumplimiento de un deber legal”, formuladas por dicho Ministerio.

**TERCERO: NIÉGANSE** las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por el Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S y del Departamento del Atlántico, por las razones expuestas en la presente providencia.

**CUARTO: SIN LUGAR** a pronunciarse de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa formulada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., por las razones expuestas en la presente providencia.

**QUINTO: SIN LUGAR** a pronunciarse de las excepciones denominadas “inexistencia del daño alegado”, “inexistencia de licitud del interés invocado”, “inexistencia de nexo de causal”, “inexistencia de título de imputación”,

PROCESO No.: 2500023410002015-01034-00  
MEDIO DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO  
CONTROL:  
DEMANDANTE: BELKIS PACHECHO CRESPO Y OTROS  
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS  
ASUNTO: CONCEDE APELACIÓN

“inexistencia de la obligación” y “hecho de un tercero” formuladas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., por las razones expuestas en la presente providencia.

**SEXTO: SIN LUGAR** a pronunciarse de la excepción denominada indemnizaciones individualizadas formulada por el Departamento del Atlántico, por las razones expuestas en la presente providencia.

**SÉPTIMO: DECLÁRASE probada la excepción denominada hecho exclusivo de la víctima**, en tanto que el título en que se presentan a demandad como desplazados, campesinos y personas indeterminadas ocupantes de hecho de un bien fiscal, no es habilitante para obtener la posesión material de un bien fiscal. Por lo tanto **NIÉGANSE** las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la presente providencia.

(...)”

2. Así las cosas, la Secretaría de la Sección Primera procedió a notificar la sentencia el 16 de junio de 2022 tal como se puede observar a folio 1124 del expediente.

4. De manera posterior, el apoderado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el 22 de junio de 2022 presentó recurso de apelación contra la sentencia del 3 de junio de 2022 estando en el término para hacerlo.

5. Por su parte la apoderada Olga del Rosario Rada González, el 7 de julio de 2022 presentó recurso de apelación fuera del término para hacerlo, pues como ya se mencionó, la sentencia se notificó el 16 de junio de 2022, contando con 5 días hábiles para interponer el recurso, los cuales se vencían el 24 de junio de 2022.

En consecuencia, el Despacho

#### **DISPONE:**

**PRIMERO: CONCÉDASE** ante el Honorable Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz contra la sentencia proferida el tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022) por haberse presentando en término.

PROCESO No.: 2500023410002015-01034-00  
MEDIO DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO  
CONTROL:  
DEMANDANTE: BELKIS PACHECHO CRESPO Y OTROS  
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS  
ASUNTO: CONCEDE APELACIÓN

**SEGUNDO:** **RECHÁZASE** por extemporánea, la impugnación presentada por la apoderada Olga del Rosario Rada González frente a la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022) proferida por este Tribunal.

**TERCERO:** **REMÍTASE** el expediente al Honorable Consejo de Estado, previas las anotaciones que sean del caso y previa comunicación a las partes.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Firmado electrónicamente  
**FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA**  
**Magistrado**

La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI, por el Magistrado Felipe Alirio Solarte Maya. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA**  
**SECCIÓN PRIMERA**  
**SUBSECCIÓN “A”**

Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintidós (2022)

**Magistrado Ponente: LUIS MANUEL LASSO LOZANO**

**Referencia:** Exp. N° 250002341000201502303-00

**Demandante:** FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.

**Demandado:** Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores

**MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

**Asunto:** Reprograma fecha para audiencia.

Mediante auto de 23 de mayo de 2022, se fijó el 21 de junio de 2022, como fecha para llevar a cabo la audiencia de contradicción del dictamen pericial y se concedió a la parte actora la oportunidad de designar un nuevo perito que exponga la experticia que obra en el cuaderno de reforma de la demanda, elaborada por el perito Luis Ernesto Rubiano Torres.

Sin embargo, mediante auto de 17 de junio de 2022, se aplazó la audiencia prevista para el 21 de junio de 2022 y se cominó a la parte demandante para que allegue el nombre del perito que va a exponer el dictamen, con el fin de fijar una nueva fecha para llevar a cabo la audiencia.

En cumplimiento a lo requerido por el Despacho, la parte actora anexó la hoja de vida del señor Carlos Eduardo Jaimes Jaimes, contador público a quien designó como perito para exponer la experticia elaborada por el perito Luis Ernesto Rubiano Torres (Fls. 321 a 376).

Por lo tanto, se fijará el 29 de agosto de 2022 a las 11:00 a.m., como nueva fecha para realizar la audiencia de contradicción del dictamen pericial, de manera mixta (presencial y virtual), en la Sala de Audiencias No. 10.

A través del siguiente *link* los sujetos procesales podrán unirse de manera virtual a la Audiencia en la fecha y hora indicadas, basta con dar *click* sobre el vínculo respectivo (<https://call.lifesizecloud.com/15384750>).

Con el fin de llevar a cabo de manera eficiente la diligencia citada, se solicita a las partes que asistirán a la audiencia de manera virtual, allegar al correo del Despacho, especialmente creado para audiencias: audienciass01des06tac@hotmail.com, con al menos una hora de antelación, los documentos que deban ser incorporados a la misma, a saber.

1) poderes y sustituciones; 2) cédula de ciudadanía y tarjeta profesional de las partes y de sus apoderados; y 3) número telefónico de contacto al que pueda comunicarse el Despacho en caso de alguna novedad, antes o durante la audiencia.

## **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Firmado electrónicamente  
**LUIS MANUEL LASSO LOZANO**  
Magistrado

La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI por el Magistrado Luis Manuel Lasso Lozano. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, conforme al artículo 186 de la Ley 1437 de 2011.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JURISDICCIONAL  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN "A"**

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**PROCESO No.:** 2500023410002016-02202-00  
**MEDIO DE CONTROL:** REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO  
**DEMANDANTE:** FLAVIO ACOSTA BARRERA  
**DEMANDADA:** NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS  
**ASUNTO:** OBEDEZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO

**MAGISTRADO PONENTE:  
FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA**

**1. OBEDECE LO RESUELTO POR EL CONSEJO DE ESTADO**

Mediante auto del 1º de junio del 2020 el Honorable Consejo de Estado resolvió lo siguiente:

**RESUELVE:**

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de agosto de 2018 por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

El fundamento de la decisión obedece a afirmar que la demanda cumple con los requisitos de forma, razón por la cual, la decisión de fondo solo puede adoptarse en la sentencia. Advirtió el Honorable Consejo de Estado.

En el caso concreto, se observa que la parte demandante interpuso una acción de grupo originada en la indebida aplicación del Decreto 2863 de 2007, al habérsele reconocido un monto menor de la prima de actividad al que en su opinión tenía derecho; empero, adujo que no se estaba solicitando

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

el reajuste y pago de lo no percibido, sino la indemnización por los perjuicios producidos por la circunstancia precedente, de manera que, para el momento en que se encontraba el proceso, bastaba la enunciación de los perjuicios y, por ende, no era procedente el rechazo de la demanda por esa razón.

**Se advierte que con la consideración previa no se está concluyendo que las pretensiones de la parte demandante son de carácter indemnizatorio, sino que se está afirmando que se formularon de ese modo, lo que era suficiente para darle trámite al escrito inicial,** por el cumplimiento de los demás requisitos de forma de la demanda, aspecto que permite concluir que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca **no podía rechazar la acción de grupo haciendo un análisis de fondo** y que, en todo caso, debe establecer si en realidad se están solicitando acreencias laborales o no en los distintos momentos del proceso previstos para ese fin.

En suma, se observa que, para el momento en que se encontraba el proceso, la demanda no podía ser rechazada y, en todo caso, la parte actora cumplió a cabalidad los requisitos de forma del libelo introductorio, en particular, los relacionados con la debida conformación del grupo y la solicitud de indemnización de perjuicios, motivo por el cual el Despacho revocará la decisión impugnada.

De acuerdo con lo anterior, el despacho procederá a obedecer y, en consecuencia, continuar con el trámite del proceso, tal como lo afirmó el superior.

De conformidad con lo expuesto, resulta claro que a los demandantes en una acción de grupo no se les puede exigir, **para el momento de la admisión de la demanda, que acrediten la causación de perjuicios**, lo cual implicaría pretermittir las etapas del proceso y, en especial el período probatorio, por manera que bastará, para la admisibilidad del medio de control en comento, que se alegue la existencia de perjuicios, al margen de que estén acreditados o no, sin que ello implique que se desnaturalice el carácter indemnizatorio de la figura, pues su existencia efectiva será analizada en el fondo de la controversia.

## 2. ANTECEDENTES

### 1º. La pretensión:



PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Los señores Flavio Acosta Barrera y otros mediante apoderada presentaron demanda en ejercicio del medio de control para la reparación de los perjuicios causados a un grupo contra la Nación- Ministerio de Defensa, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR, con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por la presunta indebida aplicación del Decreto 2863 de 2007 como ex miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro y beneficiarios con pensión de afiliados a las cajas de retiro CREMIL y CASUR.

## **2°. Admisión de la demanda:**

Mediante Auto del 20 de abril de 2017 el Despacho dispuso admitir la demanda de la referencia y ordenó las respectivas notificaciones de Ley recibiendo pronunciamientos de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional- CASUR, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL y el Ministerio de Defensa proponiendo excepciones.

## **3°. Excepciones Previas:**

Con Auto del 6 de septiembre de 2017 se resolvieron las excepciones presentadas por las entidades demandadas declarándolas no probadas.

## **4°. Conformación del Grupo:**

Mediante auto del 13 de abril del 2018 se dispuso la integración al grupo de los señores Acevedo Acevedo Julio Enrique, Acuña Trujillo Jaime, Alpala Aza Juan Bautista, Álvarez Álvarez Enrique Antonio, Anvia Oscar Henry, Aparicio Lagos Arcadio, Aramendiz Esquivel, Ardila Mateus Marco Alirio, Arias Álvarez Rubén Eduardo, Aroca Ducuara Calixto, Arteaga Mejía Leonel Eduardo, Arteaga Sarasty Ignacio, Arturo Martínez Jesús Eladio, Astorquiza Moncayo Jaime Adolfo, Ávila Mahecha Carlos Julio, Ávila Reyes Carlos Arturo, Barón Blanco Jorge Enrique, Bastidas de Gómez Alba Nicolasa, Bastidas Hidalgo Mariana de Jesús, Bayona Rincón Saúl, Becerra Duarte Darío Alfonso,

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Belarcazar Héctor Guillermo, Belarcazar Martínez Silvio Edgar, Benavides Cabrera Willan Gilberto, Benjumea María Jannet, Betancourt Chicaiza José María, Bonilla García Luis Carlos, Bucheli de Bravo Martha Fabiola, Burbano Estrada Aida Lucí, Burgos Patiño Rosa Elvira, Caicedo Noguera Heraldo Epaminondas, Camacho Caicedo Guillermo Alejandro, Camacho Londoño Fernando, Cano Gómez Alberto, Cárdenas Galindo Carlos Hernando, Cárdenas Preciado Educardo, Cárdenas Ramírez Celimo Roberto, Cárdenas Sánchez Campo Elías, Carmona Márquez Omar, Carreño Vega Jaime Humberto, Casanova Hormaza Miryam Yolanda, Castañeda Duque Heyber Antonio, Castro Carlos Fernando, Castro de Martínez Zoila, Castro Rendón Raúl, Caviedes Espinosa Víctor Julio, Cerón Vargas Benjamín, Chacón de Quintero Cecilia, Chamorro Arteaga Eduardo Olmedo, Chamorro Santander Bolívar Gerardo, Chaves Madroñero Ayda del Carmen, Chaves Urbano Segundo Maximiliano, Chingual Pasmiño Flavio Arminio, Cilima Estrada Ligia del Socorro C, Contreras Sánchez Hernando, Coral Cordoba Ernesto José, Coral de Vados Olga, Coral Insuasty Carlos Emilio, Córdoba Paz María America, Córdoba Rodríguez Antonio Eliecer, Cossío Ricardo Antonio, Cruz de Mora Ana Dolly, De la Parra Ortega Luis Hernando, De la Rosa Gómez Eduardo, Delgado Luis Guillermo, Delgado López Herminsul, Díaz del Castillo María Mercedes, Díaz Espitia Paco Ernesto, Domínguez Diana Carolina, Duran Villamil Isaías, Enciso Bonilla Hernando, Enrique Chamorro Campo Ermides, Enrique Meneses Anderson Sebastián, Erazo Vallejo Constantino, Espinosa Sepúlveda Pedro, Estupiñan de Martínez Teresa, Flores Jiménez María Elina, Forero Vida de Santos María Lucila, Franco Sánchez Otoniel, Frankis Jaime Oswaldo, Gamboa Gamboa Rubén Darío, Garcés Bucheli Campo Saúl, García de Mora Leonor, García Figueroa Campo Elías, García Garzón Edgar, Garreta Guillermo Álvaro, Gil Olaya Holden Enrique, Goenaga Rivas Enrique de Jesús, Gómez José Ramón, Gómez Avella Gustavo Emigdio, Guancha Guancha Segundo Heriberto, Guerra Ojeda Félix Ángel, Guerrero Burbano Luis Fernando, Guerrero Cabrera Hernando Julián, Guerrero Chamorro Jaime Enrique, Guerreo Serrano Cristian, Guevara Romero José Domingo, Hernández Sánchez José Arnobi, Herrera Gerardo Plinio, Herrera Garzón Pablo Emilio, Huertas López Jesús Orlando, Jiménez Sánchez Juan Benjamín, Jojoa Adarmen Luis Fernando, Lagos Aranda José Ramiro, Landazábal Espinosa Marco Aurelio, Leal Hernández Juan José,

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

León Garavito José Ricardo, Lizarazo de Martínez María Justa, López Bucheli Ana Carmen, López de Duarte Elsa Pastora, López de Silva Blanca Alicia, López de Solarte Fanny Alicia María, Lozano Aldana Manuel Antonio, Luna Guerrero Silvia Marlene, Machacón López Humberto Ubadel, Mahecha Martínez Juan José, Mallama Andrés Esteban, Malte Tarapues Ángel Vicente, Martínez Contreras Luis Antonio, Martínez Moncayo Piedad del Socorro, Martínez Rodríguez Carmen Adelaida, Mejía Magri Delia Rosa, Méndez Cañón José Baudelino, Méndez Villota Orlando Rodrigo, Meneses Ortiz Segundo Pedro, Miranda Quintero Norberto, Molineros de Hurtado Genith, Mora Acosta José Misael, Mora Benavides Luis Eduardo, Mora García Stella del Roció, Morales Miño Segundo Horacio, Moreno Moreno Hilda Alicia, Moreno Santacruz Inés del Socorro, Mosquera Cañizales Héctor Guillermo, Mosquera Montero Ramón Antonio, Mow Robinson Carlos Rogelio, Munar Martín José Ramón, Muños Cerón Valdemar Álvaro, Muñoz Muñoz Rubén Antonio, Naisa Martínez Juan Alfonso, Narváez García Ángel Anselmo, Narváez Robles William Olimpo, Navarrete Baraona Isai, Navas Zawadzky Hernando, Obando Insuasty Héctor alirio, Ojeda de Castro Zoila, Olaya Prieto Luz Marina, Ortega Guillermo, Ortega Esquivel José Ignacio, Ortiz Castellanos Eduardo, Ortiz de Rodríguez Leonor del Carmen, Ortiz Herrera Miguel Ángel, Ortiz Urbano José Silvio, Osorio Pacheco Luis Oscar, Ovalle Calderón Arquímedes, Pardo Martínez Marta Lucia, Paz Orjuela Félix Vinicio, Pazmiño Timaran Carlos Miguel, Pedroza Cortes Luis Ernesto, Perdomo José Vicente, Piamba Paz Eduardo, Pinilla Solórzano Temistocles, Pinto Rojas Flor del Carmen, Porraz Rubén Darío, Puello Reyes Bernardo, Quintero Leal José Briceño, Quiroz Londoño Luis Fernando, Ramírez Espinosa Carlos Alberto, Ramírez Osorio Luis Jesús, Ramírez Pinilla Luis Zanoni, Ramírez Silva Augusto, Revelo de Carrera Cruz, Riascos de Martínez Dolores, Ricardo Martínez Edilberto, Rincón Rodríguez Samuel Enrique, Rincón Silva Víctor Manuel, Ríos Sierra Isidro, Risueño Rosero Libardo Homero, Rivas de Bernal Isabel, Rivera Sepúlveda Jaime Alberto, Roa Alfonso José Simón, Rodríguez María Irene, Rodríguez León Alonso, Rodríguez Ortiz Cecilia, Rodríguez Rodríguez Héctor, Rojas Guerrero Enrique, Rojas Pérez Liliana, Romero de Rivera Gloria del Carmen, Romero Velázquez Pedro Nel, Rosales de Ramírez Nelly del Transito, Rosero Guasmayan Francisco Javier, Rosero Mojica Myriam del Carmen, Rosero Rosero Esther Graciela, Rubiano Ortégón Néstor,

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Saavedra Rosero Jaime Hermes, Sacristán Barrera Rubén Froilán, Sáenz González Andrés Cristóbal, Salamanca Arteaga Germán Aurelio, Sanabria Cepeda Luis Alejandro, Sánchez Pedro Vicente, Sánchez Mayorga Manuel Enrique, Sánchez Parra Fernando Iván, Sánchez Sánchez Luis Enrique, Sandoval Cacique José Rafael, Santana Bogotá Pablo Emilio, Sigindioy Muchavisoy María Gloria, Silva Lozano Juan Isidro, Solórzano Núñez Aníbal Manuel, Sossa Abril Oscar, Soto Obando Adelgisa, Suancha Daza Álvaro Gilberto, Suarez Climaco, Suarez Miranda Cleopatra Imelda, Téllez Jesús Alfredo, Terraza Benítez José Manuel, Torres Chauta José Francisco, Tatal Calics Luis Antonio, Urtado Merchán Roberto, Vados Coral Álvaro Carlos, Vados Coral Gustavo Omar, Valencia Jaramillo Francisco Humberto, Vargas Guerrero Pedro José, Vásquez Hernández Yesid, Vélez Ospina Ernesto de Jesús, Villalobos Cadena Eduardo, Villota López Segundo Braulio, Vizcaya Tole Nicolás, Yáñez Gutiérrez José Darío, Zambrano Ortiz Orlando José, Zambrano Vda de Burbano Isabel Victoria, Zúñiga Leyton Israel, Betancourt Ballesteros José Edgar, Botero Soto Iván, Botero Soto Rigoberto, Cardona Patiño Horacio, Contreras Alvarado Luis Ramón, Duque Campiño Octavio, Garzón Rueda Hugo, Giraldo Restrepo Octavio, Gómez Giraldo Norberto, Gómez Llanes Pedro Antonio, González Garzón Jaime Enrique, González Suarez Juan Alberto, Guzmán Arango Ligia, Mejía Buitrago Jorge Luis, Mesa Mesa Gonzalo de Jesús, Montes Ramírez José Miguel, Orrego Morales Edgar, Ortiz de Quiceno María Amparo, Rivera Calderón Nelson Eduardo, Rodríguez Londoño José Uberney, Rodríguez Patrana María Tomasa, Saavedra Henao José Jesús, Soto Zamora María del Carmen, Soto Zamora Julio Ancizar, Torres Mozo Wilfrido, José Vicente Villamizar Arias, Juan Bautista López García, Miguel Enrique Villalobos Guerra, José María Verdugo Pinzón, Gerardo Javier Hernández Páez, José Néstor Ardila, Gonzalo Zabala Ramírez, José albeiro Mejía Correa, Ángel Guillermo Pulido Guevara, Acevedo Díaz Luis Ariel, Agredo de Aldana Aura, Alvarado Constain Henry, Álvarez López Carlos Alberto, Álvarez Rodríguez Héctor Julio, Amado Amado Carlos Hernán, Andrade Cruz José Libardo, Anzola Rodríguez Alcides, Arango Benavides Luis Javier, Arango Marín Luis Arturo, Araujo Miller, Arbeláez Martínez José Berney, Arboleda de Franco Josefina, Arguello Buitrago David Antonio, Arguello Buitrago José Miguel, Arismendi Gómez Luis Fernando, Arismendi Gómez Alfredo, Ariza calderón francisco Alberto, Arrieta de Arco

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Rodolfo, Atehortua Ramírez Patricia Inés, Ballesteros Cataño Jesús Antonio, Ballesteros Pizarro Adolfo, Benítez Castro Moisés, Benítez Durango Leonardo de Jesús, Bermúdez Arbeláez Jairo León, Bermúdez de Correa Berenice, Bernal Duarte Jorge Agustín, Bolaños Ordoñez Luis Alfonso, Bonilla Cardona Jesús Libanel, Bonilla Riveros José Fael, Botero Borbón Uriel, Botero Rey Randolph Arturo Rafael, Bueno Ladino Hernán, Buitrago Rojas Alejandro, Cabezas Cuero Enrique Urbano, Canal Venegas Luis Alfonso, Carranza Rojas José Elmo, Cartagena López José Ramón, Castañeda José Darío, Castro Gómez Armando Sadi, Chacón Oliveros Genaro, Cifuentes Mejía José Danilo, Cipagauta López Jorge Enrique, Criado de Quintero ilva Rosa, de León Saldarriaga Gastón José, del Castillo Olaya Carlos Enrique, Delgado Riaño Leocadio, Díaz Vera William, Díaz Zambrano Álvaro, Duarte Palma Juan de Jesús, Espinosa Macías Joaquín, Espitia González Edilberto, Estrada González Joaquín Emilio, Estrada Ortiz Arley, Fernández Valera Danilo, Flores Pertuz Nelly Ruth, Galvis Castro María Lucelly, Galvis Marín Eliberto, Gamarra Polo Juan Carlos, García Bravo Jorge Alonso, García Gallo Cenón, García Gómez Elías, García Guzmán José Hermes, García Rueda Gustavo, Garzón Barreto Jaime Gustavo, Giraldo Gallego José Cenel, Gómez Luis Senen, González American José Luis, González Contreras German, Grisales Soto Ángel de Jesús, Gualteros Vargas Omar, Guzmán Moreno Luis Ernesto, Henao González Otoniel, Hernández Aguilar Miguel Orlando, Hernández Cadena Eduardo, Hernández Moreña Eugenio, Herrera Araujo Alfonso Rafael, Hoyos de López Gloria Nancy, Hoyos Rendón Ariel Antonio, Huertas Ramírez Ciro Antonio, Jaramillo Agudelo María Lucila, Jaramillo Bustamante Jesús Alberto, Jaramillo López Jairo, Jaramillo Peláez Wilmer de Jesús, Jiménez Garavito Marco Rafael, Jiménez Parra Mario, Lechuga Muñoz Isaac Salomón, Llanes Peñaranda Isbelia, Llanos Guayara Germán, Lopera Londoño Gabriel de Jesús, Lopera Viana Leonardo Arturo, López Albarracín Salomón, López Díaz Norberto Iván, López García Jaime Alberto, López Paternina José Luis, Lozada Espinosa Carlos, Manzano Jaime Yesid, Martínez Arango Orlando, Martínez Ramírez Carlos Julio, Mateus Barragán Salomón, Matta de Cabezas Evelia, Medina Garzón Argemiro, Méndez Cruz Jaime, Méndez Santos Leonardi, Mendoza Calderon Arturo, Mendoza Daza Dagoberto, Meneses Navarro Luis Olger, Mesa José Orlando, Mesa López Gloria, Mican Baquero María Eugenia, Monsalve

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

López Francisco de Paula, Montealegre Zapata Aracelly, Morales de Posada María Edith, Morales Loaiza Gustavo, Morales Marín Braulio Emilio, Morales Miranda Carlos Henrique, Moreno Mesa Rodrigo, Moreno Salcedo Pablo Emilio, Mosquera Cadena Edgar, Moulthon Altamiranda Víctor Manuel, Muños de Ramírez Inés Amparo, Muños Parra Carlos, Muños Sánchez Artemo, Murillo Orlando de Jesús, Ordoñez Granada Carmen, Osorio Salazar Orlando, pacheco Saavedra Agustín, Páez Armenta Germán Alejandro, Patarroyo Gómez Hernán Yesid, Peña Almeida Ramón, Perea Díaz Francisco, Petro Florez José Alberto, Pinedo Cáceres Carlos Arturo, Ponce Gómez Efrén, Posada Ocampo Jairo, Prado Murillo Dulver, Quintero de Tabares Alba Lucia, Ramírez de Millán Luz Helena, Ramírez Quintero Carlos Alberto, Reyes Rivera Manuel de Jesús, Rodríguez Bustamante Fernando, Rodríguez Cano Cesáreo, Rodríguez Ibáñez Pedro Fernando, Rodríguez López Cesar Tulio, Rodríguez Soto Jairo, Rojas Pérez Orlando Alberto, Romero Guzmán Luz Myriam, Romero Lugo Orlando Yerzid, Romero Ríos Orlando, Rúa de Urueña Adela, Rueda Fajardo Ely Yesid, Rueda Mujica Gabriel Gonzalo, Ruiz Jiménez Guillermo, Ruíz Mosquera Luis Emilio, Sáenz Valderrama Ernesto, Samper Cabrera Rubén Darío, Sánchez Aguirre Alberto de Jesús, Segura Orjuela Álvaro Augusto, Segura Parra Efrén, Soto Samuel de Jesús, Torres Cáceres Horacio, Torres Rueda Alfonso, Trejos Hernández Libanel, Triana Ortiz Dedulfo, Ureña Silva Jesús Ignacio, Urrea Palacios Jorge Alberto, Urueña Andrade Luz Ofelia, Vaca Monroy Miguel Antonio, Valencia López Carlos Arturo, Vanegas García Faber de Jesús, Vargas Porras Hernando, Vásquez Herrera Jesús Edilberto, Vásquez Montes Antonio Enrique, Vega Arrieta Manuel Antonio, Velásquez Abad Gabriel Jaime, Velásquez Palacio Alfonso, Velásquez de González Rosalba, Vélez Grajales Sigifredo, Vélez Tabares Darío, Vergara Carvajal Ancizar de Jesús, Verjan Charcas Emilia, Viana Blanco Germán Adolfo, Villada Marín Antonio José, Yaruro Yanine Alfonso, Yi Pérez Luis, Zabalza Polo Osvaldo, Zapata Giraldo Martín Darío, Aguirre Ruíz Héctor, Berbesi Eugenio Luis Francisco, Botero Estupiñan Harbey, Cárdenas Contreras Ciro Alfonso, Castellanos Alvarado Vicente, Castellanos Caycedo Pedro Elías, Contreras Amaya Guillermo, Cordoba Rodríguez Wilson, Enrique Luis Fernando, Murcia Vergara Alejandro, Parra Bernal Rosa Milvia, Patiño Murillo Jaime, Rolong Rincón Juan Bautista, Rosero Rivas Hugo Alcides, Toro Yepes Ernesto Antonio, Villamil Castellanos, José

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Ignacio, Guillermo Lara Páez, Jairo Salazar Medina, Teresa Neira Baena, Pablo Darío Franco Rojas, Carlos Bodenseik Ortega, Carlos Enrique Ortiz Rangel, Cenith del Socorro Reyes de la Oz, Orfa Piedad Salazar Ardila, Nydia Duque Girardo, Rafael Enrique Rodelo Rodelo, Janeth Hazime de Neira, María Gladys Bonilla Gómez, Belarmina Ortiz de Garzón, Aura Herminia Moreno Roldán, Alex Alberto Arévalo González, Arturo Pontón Liñán, Diovidaldo Serpa Gutiérrez, Dalmiro Perea García, Liborio Cruz, Miguel Alonso Medina Cifuentes, Alfonso Camacho Jiménez, Jesús María Bernal Mejía, Segundo Manuel Sarchy Rengifo, José Gabriel Rodríguez Mera, Leonel Libardo Romero Jaramillo, Ángel Edilberto Moran Rivera, Javier de Jesús Vallejo Bernal, Jesús Danilo Arcila González, José Antonio Chilanguad Rosero, Fulvio José Jiménez Pérez, Antonio Sepúlveda Vargas, Luis Alberto Martínez, Felipe Antonio Jurado Rendón, Víctor Julio Beltrán Beltrán, Valentín Sánchez Bermúdez, Fidel Ancelmo Inagan Vela, José Alonso Ramírez Hernández, Luis Alberto Guerrero Cantillo, José Alonso Ortiz Sepúlveda, Cesar Tulio García Morales, Jaime Eladio Cárdenas, Henry Martínez Gómez, Jaime Suarez Moreno, Hernán Llano Obando, Jaime Forero, Francisco Javier Herrera Grisales, Jorge Luis Peña Morales, Rafael Andrés Herrera Severiche, Edgardo Holguín Zuleta, Germán Bolívar Montenegro Benavides, Luis Arturo Criollo Perenguez, Henry Parra Bran, Rómulo Exmeling Bolaños Escobar, Sandra Milena Hurtado Valencia, Luis Humberto Borja, Francisco Cecilio Hernández Jiménez, Alonso María Vásquez Daza, Jorge Arturo Martínez Pantoja, Henry Alirio Navia Moreno, Dorencé Osorio Hernández, Luis Humberto Bastidas Goyes, Manuel Gustavo Pórtela Suarez, Gustavo Muñoz Varón, Fernando Olegario Munevar Munevar, Alberto de Jesús Orozco Yepes, Jair Moreno Valencia, Pablo Enrique Sánchez Parra, José Samuel Marín Campiño, Jorge Humberto Zuluaga Gómez, José Antonio Hernández Alvares, Jaime Humberto Salazar Florez, Hugo Eliut Lugo Bedon, Vicente Aurelio Rosero Rosero, Jaime Henrique Cuadrado Díaz, Tomas Emilio Jiménez Melo, Jorge Alberto Ruiz, Diógenes Arias Ardila, Helmer Villegas Hurtado, Roberto Gutiérrez Restrepo, Lorenzo Patiño Salgado, Luis Miguel Cortes Garcerant, Javier Octavio Ladino Rojas, Jairo Roberto Arciniegas Martínez, Patrona Guerrero Cabarcas, Álvaro Jiménez Mediana, Carlos Alberto Cortés Monje, Gilberto María Cely Velandia, Ernesto Cajiao Gómez, Félix Guzmán Vargas, José Miguel Pérez Navarro, Rodrigo Restrepo Rivera, Luz Marina

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Vargas Riaño, Antonio José, Steven Andrés Arias Gómez, Francisco Anzuris Osorio Soto, Daniel Mauricio García Acosta, Guillermo León Villa Calle, Célino Arturo Ángel Manrique y Germán Pacheco Roperó y se fijó fecha para audiencia de conciliación, asunto contra el cual la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó recurso.

#### **5o. Rechazo de la demanda por improcedencia del medio de control:**

Posteriormente mediante **Auto del 10 de agosto de 2018** se rechazó la demanda de la referencia debido a que la acción no es procedente para conocer de asuntos prestacionales sino para la indemnización de daños ciertos, de tal manera que el medio adecuado para resolver la controversia es el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, sin que en la misma se hubiese advertido que el mismo se profirió en ejercicio de control de legalidad, dejando vigente el auto admisorio de la demanda y toda la actuación posterior, razón por la cual, al ser impugnado por la parte demandante, el H. Consejo de Estado mediante providencia del 1 de junio de 2020 revocó la decisión, manifestando que no había lugar al rechazo de la demanda luego de haber sido admitida pues no era el momento procesal adecuado teniendo en cuenta que ya había quedado definido el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y en particular los relacionados con la conformación del grupo, la enunciación del carácter indemnizatorio de la pretensión partiendo del hecho de que no se declaró la nulidad de todo lo actuado y tampoco se dejó sin efectos el auto admisorio.

Aunado a lo anterior el *ad quem* indicó que en el asunto también se habían resuelto las excepciones propuestas por las demandadas, pues al haberse superado el análisis de admisibilidad no se podía tomar una decisión de esa naturaleza en concordancia con el principio de preclusión.

#### **6o. Consejo de Estado revoca auto que ordenó el Rechazo de la demanda por improcedencia del medio de control:**



PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Mediante auto del 1º de junio del 2020 se revocó la decisión anterior y se ordenó continuar con el trámite del proceso, en consideración a que la demanda cumple con los requisitos formales.

#### **7º. Recurso de reposición contra el auto del 13 de abril del 2018**

Corresponde al Despacho pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto en contra del auto del 13 de abril del 2018, presentado por la **Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**.

#### **8º. Integración al grupo:**

Ante el Honorable Consejo de Estado se presentaron peticiones de incorporación al grupo de demandantes. Efectivamente en el auto que se obedece y se cumple el H. Consejo de Estado dispuso:

##### **4. Otros aspectos**

Por medio de escrito del 27 de abril de 2018<sup>1</sup>, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interpuso recurso de reposición en contra del auto del 13 de abril de la misma anualidad, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incorporó al grupo de demandantes al señor Julio Enrique Acevedo Acevedo y otros, sin que hubiera sido resuelto por el *a quo*.

Cabe indicar que, en la medida en que la demanda fue rechazada por medio del auto apelado, no es posible devolver el expediente de manera previa a la resolución de este recurso para que se resuelva la reposición, debido a que la existencia del proceso pende de lo que se establezca en la apelación y, dado que se revocará la decisión impugnada, el *a quo* debe proceder, de manera posterior a la ejecutoria de esta providencia, a resolver la reposición incoada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Por otro lado, los señores Stella Ballesteros Rojas, Melquisedec Fonseca Pacheco, José Emidier Betancourt Betancourt, Isidro Oyola y Omaira Baquero Bermúdez solicitaron la integración o adhesión a la acción de grupo

---

<sup>1</sup> Folios 1571 a 1574 del cuaderno 4.

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

de manera posterior al ingreso del proceso al Despacho<sup>2</sup>, empero, por ser peticiones que no hacen parte del recurso de apelación, deberán ser resueltas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

### **3. CASO CONCRETO:**

#### **1º. Sobre la procedencia del medio de control**

En primera medida se resalta la improcedencia del medio de control de reparación de los perjuicios ocasionados a un grupo de personas para el reconocimiento de derechos de carácter laboral, será objeto de pronunciamiento de fondo al momento de resolver el presente asunto, tal como se ordenó por el superior.

#### **2º. Decisión del Recurso de reposición contra el auto del 13 de abril del 2018**

Corresponde al Despacho pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto en contra del auto del 13 de abril del 2018, presentado por la **Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**.

El recurso de reposición se refiere a discutir la admisión de la demanda, aspecto que pretendió ser superado con el auto de rechazo que fue revocado. En tanto que el superior ha determinado que en el caso sometido a examen el grupo se encuentra debidamente conformado y que la decisión deberá ser resuelta en la sentencia, las razones del recurso de reposición no prosperan, pues conforme lo señala la ley, la oportunidad para conformar el grupo se agota con la ejecutoria del auto de pruebas, y el proceso no ha avanzado hasta dicha etapa procesal. Además, el recurso se sustenta no en las condiciones de las personas que reclaman su inclusión al grupo, sino aspectos de procedencia de la acción de grupo, contenidas en el auto admisorio de la demanda,

---

<sup>2</sup> Folios 1886 a 1932 del cuaderno 6.

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

que como se explicó, se mantiene vigente, pues tampoco el Honorable Consejo de Estado hizo control de legalidad de dicha providencia.

### **3°. Adición del auto del 13 de abril del 2018**

Se encuentra para resolver las peticiones de incorporación al grupo, allegadas al trámite procesal, encontrando que las mismas son oportunas y conformes a derecho, razón por la cual el despacho dispondrá adicionar el auto del 13 de abril del 2018, con las siguientes personas como integrantes del grupo de la parte demandante: Stella Ballesteros Rojas, Melquidesec Fonseca Pacheco, José Emidier Betancourt, Isidro Oyola y Omaira Baquero Bermúdez, José Antonio Acosta Chamorro, Hernando Araque Nogueira, Wilson Asprilla Rivas, Carlos Iván Ávila Penagos, Presentación Barreto de Ballesteros, José Antonio Beltrán Reyes, Alfredo Bravo Cárdenas, José Boanerges Buitrago Angulo, César Dimas Burgos Peña, Martha Belén Calderón de Peña, Alberto Cárdenas Triana, Hernando Antonio Cardona, Julio César Carrillo, Agustín Castro Silva, Edgar Armando Chilito Rivadeneira, Raúl Alonso Chinchilla Neira, Julio César Cifuentes Muñoz, Álvaro Cofles Urueña, Liborio Cruz, Pedro José Cubides González, Gonzalo de Ávila Gómez, Edmundo Delgado Salazar, Silvestre Durán Leal, José Mauricio Escarraga Hidalgo, Marco Tulio Estepa Penagos, Luis Cristian Ferrer Gutiérrez, Samuel Figueroa Muñoz, Rogelio de Jesús Gallego Gil, Luis Fernando García Castañeda, Orlando García Zambrano, Mario Fidel Garzón López, William Gaviria Oñoro, Víctor González Guerrero, María Fabiola Grajales Aguirre, Luis Antonio Guerrero Chilito, Napoleón Guzmán, Heider José de Jesús Hernández Suárez, Eustaquio Segundo Hernández Tovar, Dagoberto Herrera Herrera, César Higinio Hurtado Mesa, Pablo Abel Laserna Monroy, Francisco Javier Lasplazas Ortiz, Francisco Lozada, Luis Alfredo Marín Osorio, Francisco Medina Ramírez, Efraín Melenje Obando, John Humberto Mesa Murillo, Manuel Vicente Monroy, Gilberto de Jesús Mora Vargas, Pedro Farid Moreno Rossi, Elías Daniel Nastar Cárdenas, Luis Alfonso Ocampo Díaz, Gilberto Ojeda Martínez, Gentil Armando Ortega Cortés, Jesús Arsenio Osorio Patiño, Jorge Antonio Páez Tavina, Pedro Ramón Parada Rojas, Fabio Jhonny Pérez Ortega, Fabio José Pinilla González, Gerardo Antonio Pino, José Gregorio Pomares Martínez, Mari

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Quintero Pacheco, Policarpo de Jesús Rico Campos, Fernando Rodríguez García, José Homero Rodríguez García, José Gentil Rodríguez Laguna, José Ariel Sandoval Tulande, José Benjamín, Senejoa Garzón, Enario Suárez Rodríguez, Pedro Nel Taborda Torres, Juan Bautista Uribe Figueroa, Carlos Viviel Montenegro, Manuel Sebastián Ahuanari Huanacari, Jesús José Felix Castillo, Héctor Horacio Escarraga, Omar Garay Quimbayo, Henry Esquivel Mejía, Hugo Cristancho Casas, Isidro Velandia Carreño, Juan de Jesús Velandia Gómez, Omar Ardila Castro, Reinaldo Cristaño Peña, Ruben Enrique Carvajal Moreno, José Emidier Betancourt Betancourt, Adalia María Cortés Buitrago, Andersson Andrés Caicedo Cortés, Damaris Martínez Jaramillo, Gilma Ballesteros Rojas, María Stella Ortiz Rivas, Santiago Caro Vergara, Roberto Valenzuela Romero, Arturo Vargas Avendaño, Rafael Antonio Arenas Marín, José Isain Daza Narvaez, Miguel Ángel López Bocanegra, Israel Hildalgo, Bernardo Alarcón Mora, José Gabriel Álvarez Muñoz, Jesús Antonio Arenas Jiménez, Guillermo León Arrieta Cogollo, Ismael Aviles Cardoso, Jesús Antonio Ballesteros Cataño, Fulton Baquero Parga, Edilberto Barrero Reyes, Pedro Antonio Bejarano Salgado, Rudelberto Bernal Carvajal, Jaime Antonio Calderón Gómez, Daniel Esteban Cantillo Martínez, Dagoberto Caquimbo, Horacio Chacón Garzón, Mauro Chacón Torres, Aquileo Combita Molina, José Gardel Cortés Patiño, Marco Tulio Cruz Martínez, Gladys Elena Cuello Rizo, Libardo de Ávila Vergara, Abel Delgado Linares, Ezequiel Delgado Segura, Manuel Vicente Duque Parada, Omar Dussan Hernández, Julio César Echenique Pereira, Aldemar Ernesto Echeverry Marín, María Eugenia Galeano de Galindo, Luis Eduardo Gil Sánchez, José Federico Hernández Ospino, Hernando Herrera Arévalo, Walter Javier Hurtado Morales, Jesús Alberto Jaramillo Bustamante, Antonio Wiston Kahez Cano, Luis Antonio Lagos Camacho, Jorge Alberto Lagos León, Pedro Antonio Limas Rodríguez, José Gustavo López Morales, Marcial Rafael Luque de Vega, Jorge Eliécer Machado Villar, Fhebe Manchola de Chacón, Hernando Martínez Cabal, Orlando Martínez Cortina, Edgar Martínez Perdomo, Dabogerto Joven Montenegro, Agapito Moreno Peña, Oscar Marciano Ortiz Prado, Alfonso Otálora Reyes, Miguel Ángel Palomino Mejía, Héctor Felipe Pasquel Quiñones, Nohora Pinilla de Bonilla, Fabio Piraquive Guio, Claudio José Plata Rodríguez, Juan de Jesús Quintero Castillo, Jesús María Ramos Murcia, Eduardo Ríos Montealegre, Manuel Rodríguez Cabrales, Jorge

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Ernesto Rojas Amado, Pedro Nel Rojas Peña, Jaime de Jesús Romero, Octavio Roza Suárez, Carlos Alirio Ruiz Fandiño, Humberto Bellido, Guillermo Antonio Sandoval Guzmán, Wilson Sandoval Popo, José Simón Sarmiento Aguillón, Juan Carlos Silva Amaya, Nicolás Toledo Mosquera, José Álvaro Tovar Pastrana, Jesús Toribio Troughon Narváez, Jorge Eliecer Valbuena Barriga, Pedro José Vega Reyes, Aquiles Velasco Reyes, Eduardo Colón Villareal Paredes, Juan Ernesto Zapata, José Elías Asprilla Córdoba, Atanasio Bedoya, Carlos Edgar Bejarano Acosta, Edilver Caicedo Posso, Tiberio Campaña Rentería, Luis Francisco Carrillo Santander, Harin Chaverra Castro, Isidro Cuesta Huertas, Luis Carlos Guzmán, Gerardo Mosquera Sánchez, Desideiro Muñoz Pulido, Anuar Palacios Montalvo.

#### **4°. De la solicitud de copias.**

El Despacho respecto de la solicitud de copias, resalta que en virtud de lo dispuesto en el artículo 114 del Código General del Proceso y en vigencia del artículo 4° de la Ley 2213 de 2022, se ordenará a Secretaría la expedición de copias simples del expediente a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL para lo cual, se creará un archivo PDF que será cargado a la plataforma OneDrive de Microsoft y a los solicitantes les será enviado a su correo electrónico un enlace de acceso.

Sobre la expedición de copias, se hace necesario señalar lo siguiente:

El artículo 115.7 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

De todo expediente podrán las partes o terceros solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes  
7. Las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario.

El Código de Procedimiento Civil no se aplica en este Distrito Judicial desde el 1° de enero del 2014, lo que significa que la expedición de copias NO REQUIEREN DE AUTO QUE LAS ORDENE. La expedición de copias es función secretarial, y por lo tanto, le

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

corresponde al Secretario dar cumplimiento a su función, en los términos que señala el artículo 114 del Código General del Proceso, que dispone:

Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice.
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria.
3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo pida el interesado.
4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un recurso o de cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si careciere de ellos, será de cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ordene, so pena de que se declare desierto el recurso o terminada la respectiva actuación.
5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas de oficio o a solicitud de parte.

Tal como se puede observar, la expedición de copias **NO DEBE SER ORDENADA POR EL JUEZ O MAGISTRADO** mediante auto, razón por la cual se **CONMINARÁ** la **SECRETARIA** de la Sección Primera, que dé estricto cumplimiento al contenido del artículo 114 del Código General del Proceso en relación con la expedición de copias del expediente, que como se ve, no necesita de intervención judicial, ni siquiera para la expedición de copias auténticas, por haberse derogado la disposición que así lo indicaba.

## 5º. Convocatoria a Audiencia de Conciliación:

La etapa procesal subsiguiente es la de convocar a audiencia de conciliación.

**ARTICULO 61 LEY 472 DE 1998. DILIGENCIA DE CONCILIACION.** <Ver Notas del Editor> <Incorporado en el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, artículo 85.> De oficio el juez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término que tienen los miembros del grupo demandante para solicitar su exclusión del mismo, deberá convocar a una diligencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes, que constará por escrito. La diligencia deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de convocatoria. No obstante, en cualquier estado del proceso las partes podrán solicitar al juez la celebración de una nueva diligencia a efectos de conciliar sus intereses y poner fin al proceso.

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

En la diligencia podrá participar el Defensor del Pueblo o su delegado, para servir de mediador y facilitar el acuerdo; si el Defensor hubiere presentado la demanda, dicha función corresponderá al Procurador General de la Nación o su delegado, quien obrará con plena autonomía. En la audiencia también podrán intervenir los apoderados de las partes.

El acuerdo entre las partes se asimilará a una sentencia y tendrá los efectos que para ella se establecen en esta ley. El acta de conciliación que contenga el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

El juez ordenará la publicación del acuerdo de conciliación en un medio de comunicación de amplia circulación nacional.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Despacho

## RESUELVE

**PRIMERO. – OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE** lo dispuesto por el H. Consejo de Estado mediante auto de primero (1°) de junio de dos mil veintidós (2022), que revocó el Auto de 10 de agosto de 2018 mediante el cual se rechazó la demanda.

**SEGUNDO. - NIÉGASE** el recurso de reposición interpuesto por la **Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado** contra el auto del 13 de abril del 2018.

**TERCERO. - EXPÍDASE** por Secretaría a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares las copias solicitadas, para lo cual, se creará un archivo PDF del proceso que será cargado a la plataforma OneDrive de Microsoft y le será enviado a su correo electrónico un enlace de acceso.

**CUARTO. - ADICIÓNASE** el auto del 13 de abril del 2018 para incorporar al grupo a las siguientes personas: Stella Ballesteros Rojas, Melquidesec Fonseca Pacheco, José Emidier Betancourt, Isidro Oyola y Omaira Baquero Bermúdez, José Antonio Acosta Chamorro, Hernando Araque Nogueira, Wilson Asprilla Rivas, Carlos Iván Ávila Penagos, Presentación Barreto de Ballesteros, José Antonio Beltrán Reyes, Alfredo Bravo Cárdenas, José Boanerges Buitrago Angulo, César Dimas Burgos Peña, Martha Belén Calderón de Peña, Alberto Cárdenas Triana, Hernando Antonio Cardona, Julio César Carrillo, Agustín Castro Silva, Edgar Armando Chilito Rivadeneira, Raúl

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Alonso Chinchilla Neira, Julio César Cifuentes Muñoz, Álvaro Cofles Urueña, Liborio Cruz, Pedro José Cubides González, Gonzalo de Ávila Gómez, Edmundo Delgado Salazar, Silvestre Durán Leal, José Mauricio Escarraga Hidalgo, Marco Tulio Estepa Penagos, Luis Cristian Ferrer Gutiérrez, Samuel Figueroa Muñoz, Rogelio de Jesús Gallego Gil, Luis Fernando García Castañeda, Orlando García Zambrano, Mario Fidel Garzón López, William Gaviria Oñoro, Víctor González Guerrero, María Fabiola Grajales Aguirre, Luis Antonio Guerrero Chilito, Napoleón Guzmán, Heider José de Jesús Hernández Suárez, Eustaquio Segundo Hernández Tovar, Dagoberto Herrera Herrera, César Higinio Hurtado Mesa, Pablo Abel Laserna Monroy, Francisco Javier Lasplazas Ortiz, Francisco Lozada, Luis Alfredo Marín Osorio, Francisco Medina Ramírez, Efraín Melenje Obando, John Humberto Mesa Murillo, Manuel Vicente Monroy, Gilberto de Jesús Mora Vargas, Pedro Farid Moreno Rossi, Elías Daniel Nastar Cárdenas, Luis Alfonso Ocampo Díaz, Gilberto Ojeda Martínez, Gentil Armando Ortega Cortés, Jesús Arsenio Osorio Patiño, Jorge Antonio Páez Tavina, Pedro Ramón Parada Rojas, Fabio Jhonny Pérez Ortega, Fabio José Pinilla González, Gerardo Antonio Pino, José Gregorio Pomares Mertínez, Mari Quintero Pacheco, Policarpo de Jesús Rico Campos, Fernando Rodríguez García, José Homero Rodríguez García, José Gentil Rodríguez Laguna, José Ariel Sandoval Tulande, José Benjamín, Senejoa Garzón, Enario Suárez Rodríguez, Pedro Nel Taborda Torres, Juan Bautista Uribe Figueroa, Carlos Viviel Montenegro, Manuel Sebastián Ahuanari Huanacari, Jesús José Felix Castillo, Héctor Horacio Escarraga, Omar Garay Quimbayo, Henry Esquivel Mejía, Hugo Cristancho Casas, Isidro Velandia Carreño, Juan de Jesús Velandia Gómez, Omar Ardila Castro, Reinaldo Cristaño Peña, Ruben Enrique Carvajal Moreno, José Emidier Betancourt Betancourt, Adalia María Cortés Buitrago, Andersson Andrés Caicedo Cortés, Damaris Martínez Jaramillo, Gilma Ballesteros Rojas, María Stella Ortiz Rivas, Santiago Caro Vergara, Roberto Valenzuela Romero, Arturo Vargas Avendaño, Rafael Antonio Arenas Marín, José Isain Daza Narvaez, Miguel Ángel López Bocanegra, Israel Hildalgo, Bernardo Alarcón Mora, José Gabriel Álvarez Muñoz, Jesús Antonio Arenas Jiménez, Guillermo León Arrieta Cogollo, Ismael Aviles Cardoso, Jesús Antonio Ballesteros Cataño, Fulton Baquero Parga, Edilberto Barrero Reyes, Pedro Antonio Bejarano Salgado, Rudelberto Bernal Carvajal, Jaime Antonio Calderón Gómez, Daniel Esteban



PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Cantillo Martínez, Dagoberto Caquimbo, Horacio Chacón Garzón, Mauro Chacón Torres, Aquileo Combita Molina, José Gardel Cortés Patiño, Marco Tulio Cruz Martínez, Gladys Elena Cuello Rizo, Libardo de Ávila Vergara, Abel Delgado Linares, Ezequiel Delgado Segura, Manuel Vicente Duque Parada, Omar Dussan Hernández, Julio César Echenique Pereira, Aldemar Ernesto Echeverry Marín, María Eugenia Galeano de Galindo, Luis Eduardo Gil Sánchez, José Federico Hernández Ospino, Hernando Herrera Arévalo, Walter Javier Hurtado Morales, Jesús Alberto Jaramillo Bustamante, Antonio Wiston Kahez Cano, Luis Antonio Lagos Camacho, Jorge Alberto Lagos León, Pedro Antonio Limas Rodríguez, José Gustavo López Morales, Marcial Rafael Luque de Vega, Jorge Eliécer Machado Villar, Fhebe Manchola de Chacón, Hernando Martínez Cabal, Orlando Martínez Cortina, Edgar Martínez Perdomo, Dagoberto Joven Montenegro, Agapito Moreno Peña, Oscar Marciano Ortiz Prado, Alfonso Otálora Reyes, Miguel Ángel Palomino Mejía, Héctor Felipe Pasquel Quiñones, Nohora Pinilla de Bonilla, Fabio Piraquive Guio, Claudio José Plata Rodríguez, Juan de Jesús Quintero Castillo, Jesús María Ramos Murcia, Eduardo Ríos Montealegre, Manuel Rodríguez Cabrales, Jorge Ernesto Rojas Amado, Pedro Nel Rojas Peña, Jaime de Jesús Romero, Octavio Rozo Suárez, Carlos Alirio Ruiz Fandiño, Humberto Bellido, Guillermo Antonio Sandoval Guzmán, Wilson Sandoval Popo, José Simón Sarmiento Aguillón, Juan Carlos Silva Amaya, Nicolás Toledo Mosquera, José Álvaro Tovar Pastrana, Jesús Toribio Troughon Narváez, Jorge Eliecer Valbuena Barriga, Pedro José Vega Reyes, Aquiles Velasco Reyes, Eduardo Colón Villareal Paredes, Juan Ernesto Zapata, José Elías Asprilla Córdoba, Atanasio Bedoya, Carlos Edgar Bejarano Acosta, Edilver Caicedo Posso, Tiberio Campaña Rentería, Luis Francisco Carrillo Santander, Harin Chaverra Castro, Isidro Cuesta Huertas, Luis Carlos Guzmán, Gerardo Mosquera Sánchez, Desideiro Muñoz Pulido, Anuar Palacios Montalvo.

**QUINTO.** - Como consecuencia de lo anterior, **FÍJASE** como fecha para la celebración de audiencia de conciliación el día **MARTES SEIS (6) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)** a partir de las **DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA (10:30 A.M)** a través de la plataforma Teams de Microsoft Office 365. La diligencia se llevará a cabo en los términos y con los propósitos previstos en el artículo 61 de la Ley 472 de 1998.

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Se advierte a las partes que deben concurrir a la presente diligencia a que según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, su inasistencia constituirá causal de mala conducta sancionable con destitución del cargo. Al demandante se le advierte que su no comparecencia a la audiencia lo hace incurrir en el comportamiento señalado en el artículo 44 del Código General del Proceso, y podrá ser sancionado con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El Despacho a través de correo electrónico del Magistrado sustanciador creará el enlace web de la audiencia que será puesto en conocimiento de las partes y del señor agente del Ministerio Público.

**SEXTO. - REQUIÉRASE** al abogado coordinador y a los apoderados de las autoridades accionadas para que con antelación a la celebración de la diligencia de conciliación procedan a indicar al Despacho los correos electrónicos con los cuales comparecerán a la citada diligencia. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 2213 de 2022.

**SÉPTIMO. -** En el evento de que no haya ánimo conciliatorio, en la misma diligencia, en audiencia concentrada, se proseguirá con la fase probatoria y se adoptarán las decisiones que a que haya lugar.

**OCTAVO. -** Por Secretaría **CÍTASE** a las partes y al señor Agente del Ministerio Público a la diligencia de conciliación.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Firmado electrónicamente  
**FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA**  
**Magistrado**

La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI, por el Magistrado Felipe Alirio Solarte Maya. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

PROCESO N°:	2500023410002016-02202-00
MEDIO DE CONTROL:	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
DEMANDANTE:	FLAVIO ACOSTA BARRERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
ASUNTO:	OBEDÉZCASE LO DISPUESTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Libertad y Orden

**RAMA JURISDICCIONAL  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN "A"**

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**EXPEDIENTE:** 2500023410002017-01946-00  
**MEDIO DE CONTROL:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**DEMANDANTE:** PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.  
**DEMANDADA:** CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
**ASUNTO:** RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

**MAGISTRADO PONENTE:  
FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA**

Procede el despacho a resolver las medidas cautelares:

**1. ANTECEDENTES:**

**1º. La solicitud de suspensión provisional:**

La parte demandante en el escrito de solicitud de suspensión provisional solicita se decreten las siguientes:

***Solicitud de suspensión provisional***

**1º.** *Que, como medida cautelar de urgencia, de acuerdo con el artículo 234 del CPACA, decreten la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos de la Contraloría General de la República, que declararon fiscalmente responsable a mi poderdante, por violarle derechos constitucionales fundamentales y causarle un perjuicio inminente, grave e irremediable, representados por las decisiones siguientes:*

*1. El Fallo de Responsabilidad Fiscal No. 0387 de marzo 13 de 2017, por el cual el Contralor Delegado Intersectorial 3º de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción declaró, entre otros, a mi poderdante responsable fiscalmente en forma solidaria, con otras personas naturales y jurídicas, por la suma de \$ 38.866'377.386,97 y ordenó resarcir un cuantioso perjuicio, previo embargo de sus cuentas;*

*2. El Auto No. 0984 de marzo 31 de 2017, por medio del cual el mismo funcionario resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión anterior;*

*3. El Auto No. 0185 de julio 05 de 2017, por el cual la Contralora General de la República (DF) resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión recurrida.*

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

*4. El Auto No. 001 de enero 28 de 2016, por medio del cual la Contraloría ordenó el embargo y retención de dineros depositados o que se lleguen a depositar en las Cuentas de PwC, limitando la medida hasta la suma de \$ 59.127'076.585,46.*

*2. Subsidiariamente, que decreten la suspensión provisional de los mismos actos aplicando el procedimiento ordinario previsto en el artículo 231 del CPACA.*

*3. Que decrete cualquier otra medida cautelar que considere necesaria "para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia", en los términos del artículo 229 del CPACA"*

## **2º. Fundamento de la petición de suspensión provisional.**

Pone de presente los siguientes requisitos para la suspensión provisional de los actos administrativos así:

### **1º Perjuicio irremediable.**

#### **(i) Por la disolución de la sociedad.**

Advierte que el perjuicio deviene de manera directa de la condena proferida mediante fallo de responsabilidad fiscal y los actos que lo confirman, en tanto, la condena impuesta llevaría a la disolución de la sociedad por pérdidas que disminuyen el patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito.

En el caso sometido a estudio el fallo de responsabilidad fiscal generó una obligación solidaria traducida en pérdida de \$38.866.377.386.97. La pérdida debe ser contabilizada junto a los ingresos, gastos, reservas y otras pérdidas operacionales de la empresa generadas durante la vigencia del año 2017. A partir de tal situación, debe determinarse si a empresa entrará o no en causal de disolución.

Al reconocer la pérdida de \$38.866.377.386.97 en los estados financieros a 31 de agosto de 2017 más los demás pasivos de la empresa se tiene que el patrimonio de PricewaterhouseCoopers Ltda queda en negativo en la suma de \$40.957.550.000, ubicándose significativamente por debajo de 50% del capital social de la sociedad.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Que de acuerdo con las normas del Código de Comercio se confiere un plazo a los socios para tomar u ordenar medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del 50% del capital suscrito. Sin embargo, aduce que el patrimonio de la empresa seguirá por debajo de ese 50% al finalizar el año 2017.

Que las opciones que cuenta teóricamente la sociedad para enervar la causal de disolución serían: (i) venta de bienes sociales (ii) reducción del capital suscrito (iii) emisión de acciones. (iv) no reparto de utilidades.

Que de acuerdo con el certificado de Cámara de Comercio de 4 de julio de 2017 el capital social está dividido en 1.000 cuotas con valor nominal de \$1.183.991 cada una, las cuales se encuentra repartidas entre 14 socios. En promedio cada socio tiene 71 cuotas. Existen socios mayoritarios con 100 cuotas, tres socios minoritarios con 50 cuotas y nueve socios con participaciones de 60, 70, 75 y 80 cuotas.

Que para enervar la causal de disolución por fuera de las 1.000 cuotas ya existentes, la empresa debería emitir 34.952 nuevas cuotas partes por valor de \$1.183.994 cada una.

Indica acerca de un eventual escenario en el que los socios decidieran suscribir y pagar las nuevas cuotas partes con las actuales reglas de reparto. Agrega que no se debe ser un experto en finanzas y en economía para comprender que no es razonable invertir casi 5000% más de lo que se aportó originalmente en un negocio para esperar en retorno el mismo promedio histórico de utilidades antes del fallo de responsabilidad fiscal.

Así entonces advierte el cumplimiento de las exigencias jurisprudenciales para la configuración de un perjuicio irremediable al señalar que: (i) la inminencia del perjuicio deviene del hecho de que una que reconozcan los estados financieros consolidados de la compañía a 31 de diciembre de 2017, la empresa entraría en causal de disolución.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATHERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

(ii) la gravedad del perjuicio se traduce en la extinción de la sociedad comercial por materializarse la disolución por pérdidas ocasionada por el fallo de responsabilidad fiscal. (iii) la urgencia de la medida radica en el que hecho de que este Tribunal tome medidas antes que opere la causal de disolución obligatoria de la empresa por disminución de su patrimonio, pues asegura que ninguna de las medidas legalmente previstas para enervar la causal de disolución sirve de remedio para evitar la extinción de la sociedad comercial. (iv) las medidas son impostergables, pues resulta necesario que el Tribunal suspenda transitoriamente los efectos del fallo de responsabilidad fiscal con el fin de evitar un daño antijurídico irreparable que consiste en la desaparición jurídica de la sociedad actora.

**(ii) Por el riesgo de liquidez de la empresa.**

Indica que los efectos económicos de la condena en el proceso de responsabilidad fiscal y el inicio de cobro coactivo han generado un grave riesgo de liquidez que amenaza con paralizar la operación de la empresa.

Mediante auto de No. 001 de 2016 la Contraloría decretó el embargo y retención de los dineros depositados o que se llegaren a depositar en las cuentas bancarias de PricewaterhouseCoopers Ltda limitando la medida hasta la suma de \$59.127.076.585.46. Fruto de la medida adoptada la Contraloría embargó y retuvo de la empresa 12.428.862.000.

El embargo ha aumentado el riesgo de liquidez de la empresa al perder la capacidad de hacer frente a compromisos laborales, fiscales y contractuales, hecho que ha llevado a buscar recursos con bancos y terceros a tasas más altas que las generalmente usadas por la empresa.

Que desde que quedó en firme el fallo de responsabilidad fiscal las entidades del sector financiero se han mostrado reacias a prestar dinero a la compañía señalando que el riesgo crediticio ha aumentado a consecuencia del fallo de responsabilidad fiscal.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Que la situación de la empresa estaría desmejorando pues advierte que la Contraloría mediante auto No. 00257 avocó conocimiento del proceso fiscal de cobro coactivo No. J-1719 por cuantía de \$38.866.377.386.97 y que en el auto se concedió un plazo de 3 meses para llevar a cabo el cobro persuasivo de las obligaciones derivadas del fallo de responsabilidad fiscal. Vencido este periodo la Contraloría deberá proferir mandamiento de pago, el decreto y practica de nuevas medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes.

Manifiesta que dicho riesgo afectaría la sostenibilidad de la nómina que conlleva a iniciar a corto plazo el despido masivo de 551 trabajadores y tramitar las respectivas indemnizaciones. Lo anterior causa un perjuicio adicional al fallo proferido por la Contraloría.

La empresa ha tratada de constituir una garantía bancaria o póliza de seguro, por el valor adeudado, para lograr el levantamiento de las medidas cautelares. Sin embargo, las entidades del sector financiero consultadas exigen para la expedición de la garantía de la póliza que la empresa preste a su vez garantías reales y personales de pago por un valor similar ante la condena proferida por la contraloría, por lo que dicha opción no sería viable para evitar el perjuicio irremediable.

Así entonces, advierte que los hechos planteados cumplirían los requisitos del perjuicio irremediable basado en las siguientes consideraciones: (i) la inminencia del perjuicio deriva del hecho de que el 2 de noviembre de 2017 feneció el plazo del cobro por vía persuasiva e inició el cobro coactivo, hecho que, según la parte actora, abre la posibilidad de la imposición de nuevas medidas de embargo y secuestro a las demás cuentas y bienes de la compañía. Que la inminencia del perjuicio es en este caso se manifiesta por el agotamiento del cupo de crédito, que permite cubrir los faltantes de liquidez de la compañía. (ii) la gravedad del perjuicio se plasma en el hecho de que las medidas cautelares proferidas y las nuevas por venir amenazan con la parálisis económica de la empresa y la cesación de pagos de naturaleza laboral, seguridad social



EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

y retenciones fiscales, situación que la ayudaría a su parálisis económica 551 trabajadores. (iii) la urgencia de la medida radica, según la demandante, en el hecho que si no se amparan los derechos de esta compañía, en el corto plazo la empresa debe realizar un despido masivo de trabajadores a no poder seguir pagando las nóminas de los empleados. (iv) las medidas son impostergables porque existe el riesgo que el proceso de corporativo no se suspenda, en atención a la errada interpretación del órgano de control respecto a las normas que regulan la suspensión del proceso por prejudicialidad.

### **(iii) Por la inhabilidad para contratar.**

Manifiesta que la condena en el proceso de responsabilidad fiscal genera una inhabilidad para contratar con el Estado, situación que produce un perjuicio irremediable al restringir la capacidad jurídica y limitar el derecho fundamental al ejercicio de la personería jurídica consagrado en el artículo 14 del texto superior.

El fallo de responsabilidad fiscal coloca la empresa demandante por fuera del tráfico jurídico de la contratación estatal impidiéndole participar en igualdad de condiciones, situación que se manifiesta en el hecho de que la empresa ha tenido que renunciar a la ejecución de contratos estatales, así como abstenerse de participar de procesos de selección con el Estado.

Que la empresa demandante tiene como objeto social el desarrollo por intermedio de sus socios y de sus dependientes o en virtud de contratos contadores públicos, la prestación de servicios relacionados con la ciencia contable.

En el sector público requiere de servicios de contaduría en diversos temas del orden público. Sin embargo, debido al fallo de responsabilidad fiscal la sociedad actora se había visto forzada a iniciar los trámites para ceder o terminar contratos, bajo el entendido que se ha generado una inhabilidad sobreviviente en los términos del artículo 9° de la Ley 80 de 1993, por lo que la empresa contratante debe ceder los contratos, con la particularidad que la autorización de cesión tendrá que ser aprobada en reunión

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

extraordinaria de la asamblea de accionistas, sin que sea posible legalmente interrumpir los servicios prestados hasta que ello ocurra.

A continuación, hace una relación de los contratos que ha debido ceder o terminar, entre estos señala los celebrados con el Banco Agrario de Colombia S.A.; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN; y, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Que a consecuencia del fallo de responsabilidad fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda tendrá que abstenerse de participar durante 5 años en procesos de selección, hecho que genera un perjuicio grave e irremediable, dado que la inhabilidad origina la prohibición de carácter continuado que perdura en el tiempo.

Que, a consecuencia del fallo con responsabilidad fiscal, también ha tenido que abstenerse de participar de procesos de selección con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS; la Fiscalía General de la Nación; la Procuraduría General de la Nación; el Consejo Superior de la Judicatura; y, la Contaduría General de la Nación.

Los hechos planteados muestran que los actos acusados generan a la empresa en cuanto a la inhabilidad, un perjuicio inminente, grave, que para su conjuro se necesitan las medidas urgentes impostergables.

Manifiesta que está demostrado objetivamente la existencia no solamente del perjuicio causado, sino que este reviste con todos sus rasgos el carácter de perjuicio irremediable porque condena la empresa a su iliquidez, a su disolución y muerte jurídica.

## **2° Fundamentos jurídicos o la apariencia del buen derecho.**

Alega que no solo se causa un perjuicio irremediable a la empresa PricewaterhouseCoopers Ltda con la expedición de los actos administrativos

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATHERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

acusados, sino que se viola la constitución y la ley, pues advierte que la actuación de la Contraloría se convierte en una vía de hecho administrativa.

Advierte que en la imputación de responsabilidad fiscal a PricewaterhouseCoopers Ltda no se dan los elementos que tipifican la responsabilidad fiscal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 610 de 2000.

## **2.1. El revisor no es gestor fiscal.**

Que la empresa sancionada no es sujeto de control fiscal, por lo que el fallo de responsabilidad acusado viola las normas en que dice fundamentarse, como son los artículos 268 numeral 5° de la Constitución Política, 1° y 3° de la Ley 610 de 2000, y 2° de la Ley 42 de 1993, normas inaplicables a PricewaterhouseCoopers Ltda, incurriendo así la Contraloría en error de derecho por su indebida aplicación.

Que en el caso particular se evidencia un defecto material o sustantivo en los actos administrativos acusados, que se convierte en causal de nulidad de los mismos, toda vez que: (i) El contenido de las disposiciones legales invocadas por la Contraloría para adelantar el juicio de responsabilidad fiscal contra de la actora no tienen conexidad material con los presupuestos del caso. (ii) La decisión proferida por la Contraloría padece de grave error en la interpretación de las normas invocadas para adelantar el juicio de responsabilidad, hecho que se originó en el desconocimiento de la providencia C – 840 de 2001, sentencia de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, en la que se precisa el objeto y alcance de los procesos de responsabilidad fiscal.

La Contraloría extendió el alcance de la responsabilidad fiscal a un particular que no ejerce gestión fiscal, invocando una interpretación que carece de sustento legal y constitucional, en contravía de los artículos 268 numeral 5 de la Constitución Política, 1° y 3° de la Ley 610 de 2000 y 2° de la Ley 42 de 1993, por lo tanto, se aparta injustificadamente de los criterios de exégesis planteados en la sentencia de la Corte Constitucional C – 840 de 2001.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

La decisión con fundamento en la interpretación adoptada por la Contraloría constituye violación al ordenamiento jurídico al vulnerar las garantías procesales de la empresa demandante, toda vez que desnaturaliza el objeto de la responsabilidad fiscal, al sustituir uno de los elementos legales que integran dicho concepto y reemplazarlo por criterios subjetivos.

Que el legislador definió con precisión qué se entiende por gestión fiscal en el artículo 3º de la Ley 610 de 2000, norma según la cual, la gestión fiscal es el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

Los verbos rectores o expresiones que definen la gestión fiscal en el artículo 3º de la Ley 610 de 2000 son la adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de recursos o fondos públicos, o a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas. La norma en comento es enfática en señalar para el caso de personas de derecho privado, que la gestión fiscal se limita a los casos en que dichas personas manejen o administren recursos o fondos públicos.

Que el artículo 2º de la Ley 42 de 1993 define con absoluta claridad quienes son sujetos de control fiscal, estableciendo un límite para los particulares, quienes solo están llamados a responder cuando manejen fondos o bienes del Estado, o se trate de personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos y el Banco de la República.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Que las actividades realizadas por los revisores fiscales no pueden ser consideradas como gestión fiscal, hecho que ha sido reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado e ignorado por la Contraloría en el caso bajo estudio.

El ejercicio de la revisoría fiscal en salud se encuentra expresamente regulado en el artículo 228 de la Ley 100 de 1993, limitando el alcance de dicha actividad a las funciones previstas en el libro II, título I capítulo VII del Código de Comercio, sin perjuicio de lo prescrito en otras normas.

Que el artículo 207 del Código de Comercio regula las funciones a cargo de los revisores fiscales y que ninguna de las funciones a cargo de la revisoría fiscal coincide con los verbos rectores de la gestión fiscal.

Que las labores relacionadas con la revisoría fiscal se llevan a cabo con posterioridad a la administración y manejo de recursos o fondos públicos, toda vez que la revisión que debe hacer un revisor fiscal inicia después de perfeccionados los actos de adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de recursos o fondos públicos.

Resulta claro que el revisor fiscal no aporta ninguna contribución causal al hecho que conlleva a responsabilidad fiscal, pues sus actuaciones no contribuyen en manera alguna a la realización del hecho antijurídico imputado.

Los revisores fiscales no tienen dominio del hecho en desarrollo de las conductas objeto de control fiscal porque: i) sus actuaciones no son condición necesaria para la administración y disposición de los recursos públicos; ii) sus actuaciones son posteriores a la administración y disposición de los recursos públicos, pues la contabilidad refleja el registro y clasificación contables de eventos ya ocurridos.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

La Contraloría confunde el “autorizar el balance” con “avaluar la destinación de recursos” dada por la entidad y reflejada en el balance. El primer escenario implica única y exclusivamente determinar si los estados financieros han sido preparados siguiendo las normas contables aplicables a la entidad. El segundo, por su parte, además de ser una responsabilidad que es propia de la Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas, implica la potencialidad de administrar los recursos. Claramente la firma de los balances o la opinión que sobre éstos se emita, no puede equipararse a la autorización respecto del uso o destinación de los recursos de la entidad, actividad propia de los administradores de la sociedad.

En el caso en estudio, la presunta desviación de recursos de la salud surgió siempre con ocasión del perfeccionamiento de acuerdos de voluntades por parte de Coomeva EPS con terceros, que tenían por objeto la compraventa o suministro de bienes y/o la prestación de servicios.

Que ninguna de las funciones a cargo del revisor fiscal tiene el alcance de impedir la firma de acuerdos de voluntades o suspender su ejecución una vez perfeccionados, toda vez que cualquier vicio de los mismos solo puede ser controvertido ante el juez natural de esos contratos.

Advierte que los argumentos expresados en el fallo de segunda instancia evidencian que la Contraloría trasgredió el alcance que la Corte Constitucional dio al objeto de responsabilidad fiscal en la sentencia C – 840 de 2001.

La Contraloría desconoció que el control fiscal no se puede practicar in sólido o con criterio universal, sino que debe ser ejercido con criterio selectivo limitando su aplicación solo a los particulares que tengan capacidad decisoria frente a la administración y manejo de recursos o fondos públicos. Sobre el particular la sentencia C – 840 de 2001.

La Contraloría fundamentó la responsabilidad de la demandante en criterios formados a partir de supuestos deberes y funciones en el cumplimiento de la actividad de revisoría

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

fiscal, sin asidero legal. En efecto, el órgano de control concluyó que a los revisores fiscales les asiste un deber de vigilancia antes y durante la administración de los recursos parafiscales para garantizar la legalidad de la ejecución de dichos recursos públicos a cargo de Coomeva E.P.S., ignorando por completo que las funciones del revisor fiscal en temas de salud se encuentran expresamente reguladas en el artículo 228 de la Ley 100 de 1993, norma según la cual, las facultades de revisión fiscal son las previstas en el libro II, título I capítulo VII, del Código de Comercio, actividades que nada tienen que ver con el desarrollo de gestión fiscal.

La Contraloría fundamentó así la responsabilidad fiscal de la demandante a partir de una relación que rompe con el principio de tipicidad de la infracción, desconociendo el verdadero alcance de la función de revisoría fiscal.

Que el sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta consagrado en el artículo 1º de la Ley 610 de 2000 ostenta un rango derivado y dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente dicha, siendo a la vez manifiesto su carácter restringido en tanto se trata de un elemento adscrito dentro del marco de la tipicidad administrativa. De allí que la Contraloría tenía el deber de precisar rigurosamente el grado de competencia o capacidad que le asistía a la demandante en torno a una específica expresión de la gestión fiscal.

Contrario a lo indicado, la Contraloría desatendió la obligación de probar cuál era la capacidad decisoria de la empresa auditora frente a la administración y manejo de los fondos o bienes públicos presuntamente desviados o cual fue el verbo rector de gestión fiscal que desarrolló en cumplimiento de las labores de revisoría fiscal. Adicionalmente, la Contraloría ignoró por completo el hecho que el revisor fiscal carece de capacidad decisoria alguna o de la posibilidad de vetar las determinaciones de los responsables frente a la administración de fondos o bienes del erario o puestos a cargo de la empresa para la cual realiza su labor.

Que la Contraloría no probó que los actos imputados a la demandante presentaran una

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal que correspondía a COOMEVA, pues flagrantemente desatendió las siguientes consideraciones: (i) La gestión del revisor fiscal no comprende aspectos ajenos a las funciones propias de su cargo ni mucho menos a su profesión de contador público; (ii) Las labores relacionadas con la revisoría fiscal se llevan a cabo con posterioridad a la administración y manejo de recursos o fondos públicos, y (iii) El revisor fiscal no aporta ninguna contribución causal al hecho que conlleva a responsabilidad fiscal, pues no hay una conexidad próxima y necesaria entre la disposición de los recursos y la labor adelantada por el revisor fiscal.

Que la labor llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers Ltda no era condición indispensable para que Coomeva EPS contratara y pagara honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, adecuaciones e instalaciones, gastos de viajes, libros, suscripciones y periódicos, música ambiental, elementos de aseo y cafetería, útiles, papelería y fotocopias, impresiones, combustibles y lubricantes, taxis, buses, casino y restaurante, parqueaderos y otros.

Indica que las actuaciones de la Contraloría frente al cumplimiento de los deberes legales de la demandante constituyen una vía de hecho, entendida como violación grosera de la ley, en cuanto que el fallo de responsabilidad fiscal se fundamenta en normas inaplicables a PricewaterhouseCoopers Ltda, al no ser la empresa sancionada sujeto de control fiscal, razón suficiente para decretar la suspensión provisional de los actos acusados.

## **2.2. La conducta del revisor fiscal no fue dolosa ni culposa.**

Advierte que la conducta del revisor fiscal no fue dolosa ni culposa, en tanto, la existencia de dolo o culpa en una conducta deben demostrarse, no se presumen, carga de la prueba con la que no cumplió la Contraloría, que trató este asunto como si fuera un caso de responsabilidad objetiva en los que, como es sabido, basta demostrar el



EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

hecho causante, el perjuicio y la relación de causalidad.

Pone de presente que el comportamiento del revisor fiscal en este asunto fue el propio de los revisores fiscales, quienes no tienen la facultad de inmiscuirse en asuntos propios de la administración de la empresa, pues ellos no son coadministradores.

Que en ninguna parte del expediente que sirvió de fundamento a la sanción fiscal aparece demostrado, ni siquiera referencia, a la demostración de la existencia de culpa o dolo en la actividad cumplida por PricewaterhouseCoopers Ltda en su labor de revisoría fiscal. Y la existencia de esa culpa o dolo correspondía demostrarla a la Contraloría, no a la demandante.

La Contraloría violó las normas precitadas y los precedentes judiciales en cuanto sancionó a una persona jurídica que, a la luz de la ley y de la jurisprudencia, no es sujeto de responsabilidad fiscal por no ser gestora fiscal y, además, su conducta siempre fue de buena fe, sin que, en consecuencia, se le haya demostrado la existencia de dolo o culpa como revisor fiscal en el cumplimiento de sus funciones.

### **3° Inexistencia del daño.**

Advierte la parte actora que hubo irregularidad en la contabilización de las operaciones económicas derivadas de la prestación del servicio de salud, por lo que el fundamento de la responsabilidad imputada es inexistente.

La Contraloría endilgó responsabilidad fiscal a la demandante por un presunto quebrantamiento de las normas contables señaladas en el Plan Único de Cuentas para Entidades Promotoras de Salud, contenido en la Resolución No. 1804 de 2004.

Que en criterio de la Contraloría, durante los años 2007 y 2008 Coomeva contabilizó “gastos administrativos, como costos del servicio de salud, sin tener ninguna relación con la prestación del servicio”.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Sostuvo la Contraloría que durante los años 2007 y 2008 Coomeva EPS dio un tratamiento contable doble y/o variable a las UBAs, UPREC y Puntos Coomeva, al tratar dichas dependencias simultáneamente como: (i) Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), a las que se les realizaban pagos por conceptos de Contratos de Capitalización, Contratos por Evento, Contratos por Actividad y Costos por Enfermedades Catastróficas. (ii) Centros de costos a los que se imputaban costos indirectos.

Que en el Fallo de Responsabilidad Fiscal No. 0387 de marzo 13 de 2017, la Contraloría sostuvo que en el caso en estudio los costos directos objeto de reproche fiscal debieron ser registrados como gastos operacionales administrativos no asociados a la prestación del servicio de salud.

Advierte que COOMEVA EPS sí utilizó correctamente las reglas contables y el Plan Único de Cuentas que se encontraba expresamente aprobado para las empresas promotoras de salud, registrando de esa manera actividades económicas previstas y autorizadas por la Ley 100 de 1993, tales como la prestación directa de servicios de salud, a través de dependencias que hacen parte de la EPS, pero que no cuentan con personería jurídica.

Que contrario a lo señalado por la Contraloría es necesario aclarar que: (i) Las erogaciones y cargos glosados por la Contraloría deben recibir el tratamiento contable de costos indirectos. (ii) Las erogaciones y cargos glosados por la Contraloría no pueden recibir el tratamiento contable de gastos. (iii) Contablemente no es posible aplicar las reglas contables de una IPS a una EPS.

Que en el caso en estudio, se probará en el curso del proceso, los costos glosados por la Contraloría fueron erogaciones necesarias, proporcionales, asociadas directamente con la prestación directa del servicio de salud ejecutado por Coomeva EPS, a través de sus dependencias UBAs, UPREC y Puntos Coomeva.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

La Contraloría no realizó un análisis pormenorizado de cada erogación, para determinar si se generaba en desarrollo del objeto principal del ente económico (Gasto), o, como consecuencia necesaria, proporcional y asociada con la prestación directa del servicio de salud por la EPS (Costo indirecto), hecho que vicia el acto administrativo en su motivación.

Que las erogaciones objeto de glosa por la Contraloría fueron apropiadamente registradas por Coomeva EPS en las cuentas de Costos previstas por el Plan Único de Cuentas establecido por la Superintendencia Nacional de Salud (Cuenta 61 – COSTOS DE VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Cuenta 6110 - UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA y Subcuenta 611051 – GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD), en cuanto corresponden a los costos requeridos para prestar el servicio de salud en las Unidades Básicas de Atención.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATHERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Concluye afirmando que para los años 2007 y 2008, los hechos económicos relacionados con los costos directos e indirectos de una Empresa Promotora de Salud -E.P.S.-, necesarios y proporcionales, cuando estas entidades prestaban directamente los servicios de salud, se debían contabilizar, dependiendo de la Unidad Funcional y el Centro de Costos, en las cuentas y subcuentas arriba relacionadas.

Sostiene que el error en la motivación de los actos acusados que cometió el ente fiscal fue el de considerar ajenos a la prestación del servicio de salud a todos aquellos costos que de manera directa o indirecta hacen parte del proceso complejo de la prestación del servicio de salud.

Afirma que la contabilidad refleja el registro y clasificación contables de eventos ya ocurridos. Olvida la Contraloría que la contabilidad en Colombia se lleva por el sistema de Causación y no por el sistema de Caja.

Que el registro contable en las cuentas de Gastos no aumenta o disminuye en nada los resultados de Coomeva EPS y, por tanto, no puede concluirse que de registrarse en cuentas del Gasto, el hecho económico no se hubiera realizado conforme se llevó a cabo.

Que el obrar contable de PricewaterhouseCoopers Ltda como revisora fiscal de COOMEVA en el tema relacionado con el registro de los costos de la EPS generados en la prestación directa del servicio de salud se ajustó a las regulaciones legales en la materia, por lo que los actos acusados se fundamentaron en consideraciones jurídicas erradas y en hechos inexistentes, incurriendo por ello en falsa motivación.

Que puede concluirse entonces que no hubo detrimento alguno al erario y en consecuencia, por este concepto, falta el otro elemento constitutivo de la responsabilidad fiscal.

### **3º. Posición de la Contraloría General de la República:**

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Advierte que la solicitud de suspensión provisional hace una mención fraccionada y/o distorsionada de los hechos, sin soporte fáctico, jurídico y probatorio, desbordando el ámbito y finalidad de la cautela y es improcedente por que carece de la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA para el presente medio de control.

Del análisis del escrito cautelar que la explicación ofrecida no informa las razones por las cuales los actos administrativos demandados vulneran los artículos 4, 6, 21, 29, 38, 90, 114, 119, 121, 123, 150-12 y 268-5 de la Constitución Política; los artículos 1 y 3 de la Ley 610 de 2000; el artículo 228 de la Ley 100 de 1993; el artículo 41 de la Ley 43 de 1990; la Ley 145 de 1960; el libro II título I capítulo VII del código de comercio; los artículos 137 y 138 del CPACA; y, la Resolución 1804 de 2004 de la Superintendencia Nacional de Salud.

Que la parte actora se apoyó en manifestaciones dirigidas a mostrar un escenario punitivo e injusto que conlleva a la disolución de la sociedad demandante no solo porque la obligación a su cargo es superior a su patrimonio, sino porque hay dineros embargados y retenidos, y no puede contratar con el Estado.

Que equiparó de manera incorrecta la decisión atacada con una condena cuando es una mera sanción de resarcir el patrimonio público que se vio menguado por su proceder y que convenientemente omitió informar que dentro del proceso de cobro coactivo, además de poder solicitar la suspensión del cobro coactivo, también cuenta con la posibilidad de contar con la posibilidad de alcanzar una formula de pago de la obligación fiscal durante la etapa persuasiva, lo cual le permitiría hacer cesar los efectos previstos por el legislador para quien habiendo sido responsable fiscal no ha honrado su deber de pago, en tanto cumpla adecuadamente con los compromisos adquiridos.

Manifiesta que no hay prueba de las desastrosas consecuencias pronosticadas para el 31 de diciembre de 2017 adoptadas por los socios de la parte actora para enjugar como perdida una obligación. Ello por que el deber de reparar que se deriva de un fallo de

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

responsabilidad acarrera la restitución de recurso estatales, y no el pago de una sanción o multa por infracción o precepto legal alguno.

Lo que se aprecia es que la solicitud de suspensión busca un pronunciamiento a destiempo del Despacho de conocimiento, respecto de asuntos que solo podrán ser materia de análisis en la sentencia y previo agotamiento de las etapas del procedimiento establecido en el CPACA.

Que la defensa de la parte demandante olvida que la suspensión provisional no tiene vocación de evitar de forma definitiva el cumplimiento de los efectos de un determinado acto administrativo, sino que, tal medida es una excepción a la eficacia del acto administrativo, a su ejecutoriedad, que le impide a la administración, provisionalmente hacerlo cumplir, a pesar de la presunción de legalidad que los ampara y del derecho que tiene la entidad de hacerlo cumplir por si misma.

Que el fallo de responsabilidad fiscal puede acarrear por causa del legislador unas consecuencias del orden patrimonial que resulten negativas para los intereses del declarado responsable fiscal, limitadas exclusivamente a la orbita de su relación con el estado. Que considerando que la decisión administrativa estuvo antecedida de un trámite en donde fueron plenamente determinadas los elementos de la responsabilidad fiscal, en todo momento se garantizaron los derechos al debido proceso y la defensa de los implicados, se concluye que la demandante está en el deber jurídico de pagar la obligación pecuniaria que fue declarada por el acto administrativo demandado. Obligación que indica no ha sido satisfecha.

Que para afirmar lo contrario se requiere que el Despacho analice la totalidad del expediente administrativo y emita una sentencia que resuelva el litigio de plano. Advierte que la solicitud de medida de suspensión provisional incumple con le deber de indicar con precisión el concepto de violación.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Que la parte actora olvida que, en materia de medidas cautelares, el juez, debe velar porque aquellas faciliten los efectos y bla eficacia de una posible sentencia dentro del proceso principal.

Así entonces, solicita al Tribunal deniegue la suspensión de los actos administrativos proferidos dentro del proceso de responsabilidad fiscal UCC/PRF/036/2012.

## **2. CONSIDERACIONES:**

### **2.1. Competencia:**

La solicitud de suspensión provisional debe ser resuelta por el magistrado sustanciador, en los términos señalados por el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2089 de 2021.

### **2.2. Actos administrativos demandados.**

Los actos administrativos demandados proferidos por la Contraloría General del República, son los siguientes:

- Fallo de responsabilidad fiscal No. 0387 de 13 de marzo de 2017.
- Auto No. 0984 de 31 de marzo de 2017 por el cual se decide un recurso de reposición.
- Auto No. 0185 de 5 de julio de 2017 por el cual se decide un recurso de apelación.

### **2.3. El Problema Jurídico Planteado**

Le corresponde al Despacho resolver el siguiente problema jurídico:

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

¿Están probados los elementos de hecho y de derechos, señalados por la ley, para suspender provisionalmente el acto administrativo demandado?

## 2.4. Respuesta al Problema Jurídico

No

## 2.5. Suspensión Provisional en la Ley 1437 de 2011.

Con la expedición de la Ley 1437 de 2011, la adopción de la medida cautelar de suspensión provisional ha variado. Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984, el artículo 152 disponía que para declarar la suspensión provisional de un acto administrativo era necesario acreditar los tres requisitos allí citados, esto es, i) que la medida se solicite y se sustente de modo expreso en la demanda o en escrito separado, presentado antes de que se admitiera; ii) la existencia de manifiesta infracción de una de las normas invocadas como fundamento de la misma por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud y, iii) la prueba sumaria de perjuicio irremediable, cuando se pretendiera, además, un restablecimiento del derecho.

Por su parte, dispone la ley 1437 del 2011 en relación con la medida de suspensión provisional, lo siguiente:

### **“(…) CAPÍTULO XI**

#### **Medidas cautelares**

**Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares.** *En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.*

*La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.*



EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

*Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.*

*Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:*

- 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.*
- 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.*
- 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.*
- 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.*
- 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.*

*Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.*

*(...)*

**Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.**

*En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:*

- 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.*
- 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.*
- 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.*
- 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:*

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

*a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o  
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. (...)” (Subrayado fuera de texto)*

Con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, para que proceda la solicitud de suspensión provisional de un acto administrativo es necesario acreditar:

1. Que la solicitud se efectúe en la demanda o en escrito separado.
2. Que la violación surja del análisis del acto administrativo y su confrontación con normas superiores invocadas como violadas, o que tal violación se evidencie del estudio de las pruebas allegadas con la petición.
3. Se deberá probar la existencia de perjuicios, si llegase a pretenderse el restablecimiento del derecho y/o la indemnización de perjuicios.

Así las cosas, con base en dicho marco normativo se procederá a resolver la solicitud de medida cautelar que se dirigió a la suspensión provisional de los actos administrativos expedidos por la Contraloría dentro del proceso de responsabilidad fiscal UCC/PRF/036/2012.

## **2.6. Caso concreto**

Procederá el Despacho a analizar la solicitud de suspensión provisional a partir de los requisitos señalados en la Ley 1437 de 2011, por lo cual, se requiere la concurrencia y ocurrencia de los tres (3) requisitos ya citados, de los cuales, en cuanto tiene que ver con el presente asunto, se observa lo siguiente:

- a. La medida fue solicitada en escrito aparte, tal como se observa en el expediente electrónico, y por tanto, se tiene como cumplido el primer requisito.
- b. Ahora bien, sobre el segundo de tales requisitos, esto es, el referente a la violación de normas superiores, cuyo análisis debe surgir de la confrontación de ellas con los actos administrativos, o que tal violación se evidencia del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, se tiene que:

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

De los antecedentes administrativos se desprende que el proceso de responsabilidad fiscal se originó a partir de la indagación preliminar N 017 de 2011, adelantada por la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Social, para establecer si existió indebida utilización de los recursos y desvíos de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social, y por consiguiente afectación al servicio público de salud y detrimento patrimonial por parte de COOMEVA EPS S.A.

Mediante el auto N° 000166 del 10 de septiembre de 2012, se dispuso el cierre de la Indagación Preliminar N° 017 de 2011 y se recomendó la iniciación de procesos de responsabilidad fiscal con respecto a tres (3) hechos generadores de daño que allí se indicaron.

El órgano de investigación fiscal señaló que correspondió a este ente de control la investigación del hecho que allí se denominó como "Distorsión de las cuentas de costo por depreciación en propiedad, planta y equipo (leasing) y otros gastos que debieron ser asumidos por la entidad y fueron registrados como costos".

En auto número 208 de 3 de octubre de 2012 que dispuso la apertura del proceso de responsabilidad fiscal se indicó que la conducta generadora del daño ocasionada por COOMEVA EPS S.A. al Estado se da en la modalidad de disminución de la disponibilidad del recurso parafiscal debido a que la Entidad Promotora de Salud carga el valor de los gastos por depreciación de los bienes entregados a título de leasing financiero, a los costos de prestación del servicio de salud y de igual forma lo hace con otros gastos que incluye en la misma cuenta 6105 Costos de Prestación del Servicio de Salud.

*a) Distorsión en los estados financieros vigencia 2008 de las cuentas de Costo de Prestación del Servicio de salud por la inclusión del gasto de la depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero entregados en virtud del leasing a COOMEVA EPS. La distorsión alcanzó el valor de dos mil ochocientos veintitrés millones novecientos noventa y nueve mil doscientos setenta y tres pesos (\$2.823.999.273), durante la vigencia. Quiere ello decir, derivado del análisis a las pruebas recaudadas durante la*

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

*indagación preliminar, que Coomeva EPS S.A. celebró contratos de leasing financiero para la obtención de unos equipos de cómputo destinados a las UBA. El caso adquiere relevancia cuando se conoce que en su contabilidad revela los gastos por depreciación de dichos equipos como costos, los cuales sobrestiman en su totalidad los Costos de Prestación del Servicio de salud.*

*b) Inclusión de gastos por honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, adecuaciones e instalaciones, gastos de viaje, libros, suscripciones y periódicos, música ambiental, elementos de aseo y cafetería, útiles, papelería y fotocopias. impresiones, combustibles y lubricantes, taxis y buses, casino y restaurante. parqueadero y otros; en los costos de la prestación del servicio de salud. que para el año 2007 ascendieron a diecinueve mil quinientos cuarenta y ocho millones ciento treinta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos (\$19.548.135.665) y para el año 2008, a veinticuatro mil novecientos veintidós millones ciento catorce mil novecientos treinta y tres pesos (\$24.922.114.933) para un total de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta millones doscientos cincuenta mil quinientos noventa y ocho pesos (44.471.250.598)*

Mediante auto N° 01164 de agosto 21 de 2015, la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por la inclusión, en la contabilidad de COOMEVA EPS S.A., durante el periodo 2007 y 2008, de gastos no asociados a la prestación del servicio de salud en la cuenta de Costo del Servicio, por concepto de honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, adecuaciones e instalaciones, música ambiental, suscripciones y periódicos, combustibles y lubricantes, taxis y buses, parqueadero, entre otros, que fueron registrados en la contabilidad de COOMEVA EPS, sin que éstos tengan ninguna relación con la prestación del mismo; registros estos, cuyo monto sin indexar fue cuantificado en el citado auto de imputación de responsabilidad fiscal en TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$39.418.051.056,97): monto al cual indica que arribó el ente de control fiscal, luego de efectuar una verificación, validación y análisis de los estados financieros certificados y los auxiliares contables de los documentos que fueron obtenidos en las distintas visitas especiales Placas durante la actuación.

Se indicó también en la citada providencia que los aludidos conceptos se registraron así por corresponder a aquellos asociados a las Unidades Básicas de Atención (UBA),

Unidades de Prevención clínica (UPREC) y Puntos de Atención Coomeva (PC), que conformaban la red de IPS propias de COOMEVA EPS.

Seguidamente se determinar la naturaleza y demás circunstancias de las denominadas UBA, UPREC y PUNTOS COOMEVA, en calidad de red propia de la Entidad Promotora de Salud COOMEVA.

Procederá entonces el Despacho a realizar un análisis comparativo de los argumentos expuestos por la parte demandante en el escrito de medida cautelar con solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados en conjunto con las normas señaladas como violadas en consonancia con los fundamentos de la decisión adoptada por parte del órgano de control fiscal contenida en los actos expedidos por la Contraloría en el trámite administrativo que con llevo a la declaratoria de responsabilidad fiscal del hoy demandante.

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
<p>La Contraloría extendió el alcance de la responsabilidad fiscal a un particular que no ejerce gestión fiscal, invocando una interpretación que carece de sustento legal y constitucional.</p> <p>Agrega que Contraloría incurrió en error de derecho por indebida aplicación al extender el alcance de la responsabilidad fiscal a un particular que no ejerce gestión fiscal.</p> <p>(...)</p>	<p><b>GESTIÓN FISCAL</b></p> <p>(...)</p> <p>En lo atinente a la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA. quien actuó como revisor fiscal de COOMEVA EPS durante el periodo que se investigó en este proceso, se tiene que, para el efecto, aquella presentó ante la EPS dos ofertas mercantiles (octubre 6 de 2006 y marzo 17 de 2008) (folios 1236 a 1238 cuaderno principal 7), siendo aceptadas por la segunda de las mencionadas, con las cuales se comprometió a "la realización de las funciones asignados por la ley y los estatutos de COOMEVA EP.S. S.A. al Revisar Fiscal, que comprende básicamente el examen de todas las áreas, operaciones, actos, documentos, registros y bienes que o su juicio profesional planifiquen el enfoque y alcance necesario para</p>	<p><b>Constitución política:</b></p> <p><b>ARTICULO 268. &lt;Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:&gt; El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:</b></p> <p>(...)</p> <p>5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación.</p> <p><b>Ley 610 de 2000:</b></p> <p><b>ARTÍCULO 10. DEFINICION. &lt;Ver Notas de</b></p>

EXPEDIENTE:  
MEDIO DE CONTROL:  
DEMANDANTE:  
DEMANDADA:  
ASUNTO:

2500023410002017-01946-00  
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
PRICEWATHERHOUSECOOPERS LTDA.  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
	<p>emitir un dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros de COOMEVA E.P.S. S.A.,...</p> <p>En la cláusula segunda de las mencionadas ofertas mercantiles, se indicó:</p> <p>"REGIMEN LEGAL. De acuerdo con lo previsto en la Ley 43 de 1990, EL OFERENTE desarrollará su trabajo de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptados, Código de Comercio, los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Las normas sobre los entes del sector Salud y las demás disposiciones emitidas por los órganos de vigilancia y control correspondientes...." (Subrayas fuera del texto)</p> <p>Atendiendo a lo anterior, era obligación de PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA... verificar que en COOMEVA EPS SA. se aplicaran de manera íntegra las normas contables aplicables a las EPS, vigentes para los meses de octubre a diciembre de 2007 y el año 2008, es decir, el Plan Único de Cuentas establecido por la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Resolución N° 1804 de 2004.</p> <p>El mencionado Plan Único de Cuentas determinó con certeza la forma de registrar los gastos operaciones de administración en los que incurriera una EPS con desarrollo de su objeto social principal, dentro de los cuales se clasifican los gastos por honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, adecuaciones e instalaciones, música ambiental, suscripciones y periódicos, combustibles y</p>	<p><b>Vigencia&gt; &lt;Aparte subrayado</b> <b>CONDICIONALMENTE</b> <b>exequible&gt;</b> El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.</p> <p><b>ARTÍCULO 3o. GESTION FISCAL.</b> Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.</p> <p><b><u>Ley 100 de 1993.</u></b></p>

EXPEDIENTE:  
MEDIO DE CONTROL:  
DEMANDANTE:  
DEMANDADA:  
ASUNTO:

2500023410002017-01946-00  
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
PRICEWATHERHOUSECOOPERS LTDA.  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
	<p><i>lubricantes, taxis y buses, parqueadero y otros, tal como claramente lo describe la cuenta del grupo 51.</i></p> <p><i>Así las cosas, PROCEWATERHOUSECOOPERS LTDA, con su actuar omisivo, contribuyó de manera determinante en la producción del daño patrimonial que se ha determinado en este proceso, puesto que avaló la distorsión de los estados financieros de COOMEVA EPS y la consecuente destinación de recursos del SGSSS para sufragar gastos administrativos no asociados a la prestación del servicio de salud</i></p> <p><i>(...)</i></p>	<p><b>ARTÍCULO 228. REVISORÍA FISCAL.</b> Las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera sea su naturaleza, deberán tener un revisor fiscal designado por la Asamblea General de Accionistas, o por el órgano competente. El revisor fiscal cumplirá las funciones previstas en el libro II, título I, capítulo VII del Código de Comercio y se sujetará a lo allí dispuesto sin perjuicio de lo prescrito en otras normas.</p> <p>&lt;Ver Notas del Editor&gt; Corresponderá al Superintendente Nacional de Salud dar posesión al Revisor Fiscal de tales entidades. Cuando la designación recaiga en una asociación o firma de contadores, la diligencia de posesión procederá con relación al contador público que sea designado por la misma para ejercer las funciones de revisor fiscal. La posesión sólo se efectuará una vez el Superintendente se cerciore acerca del carácter, la idoneidad y la experiencia del peticionario.</p> <p><b><u>Ley 42 de 1993.</u></b></p> <p><b>Artículo 2º.-</b> Son sujetos de control fiscal los órganos que integran las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos e independientes como los de control y electorales, los organismos que hacen parte de la estructura de la administración nacional y demás entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta,</p>

EXPEDIENTE:  
MEDIO DE CONTROL:  
DEMANDANTE:  
DEMANDADA:  
ASUNTO:

2500023410002017-01946-00  
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
		<p>las empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos y el Banco de la República.</p> <p>Se entiende por administración nacional, para efectos de la presente Ley, las entidades enumeradas en este artículo.</p> <p>Parágrafo.- Los resultados de la vigilancia fiscal del Banco de la República serán enviados al Presidente de la República, para el ejercicio de la atribución que se le confiere en el inciso final del artículo 372 de la Constitución Nacional. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley Orgánica del Banco de la República.</p> <p><b><u>Código de Comercio:</u></b></p> <p><b>ARTÍCULO 207. &lt;FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL&gt;.</b> Son funciones del revisor fiscal:</p> <p>1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva;</p> <p>2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios;</p> <p>3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la</p>



EXPEDIENTE:  
MEDIO DE CONTROL:  
DEMANDANTE:  
DEMANDADA:  
ASUNTO:

2500023410002017-01946-00  
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
PRICEWATHERHOUSECOOPERS LTDA.  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
		<p>inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados;</p> <p>4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines;</p> <p>5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título;</p> <p>6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales;</p> <p>7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente;</p> <p>8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario, y</p> <p>9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.</p> <p>10) &lt;Numeral adicionado por el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:&gt; Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos</p>

EXPEDIENTE:

MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADA:

ASUNTO:

2500023410002017-01946-00

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
		<p>del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores.</p> <p><b>PARÁGRAFO.</b> En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del revisor fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea general, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales, ni dictaminar sobre ellos.</p>
<p>La conducta del revisor fiscal no fue dolosa ni culposa</p> <p>la existencia de dolo o culpa en una conducta deben demostrarse, no se presumen, carga de la prueba con la que no cumplió la Contraloría, que trató este asunto como si fuera un caso de responsabilidad objetiva en los que, como es sabido, basta demostrar el hecho causante, el perjuicio y la relación de causalidad.</p>	<p><b>CONDUCTA, NEXO CAUSAL Y CULPABILIDAD DE CADA UNO DE LOS IMPUTADOS</b></p> <p><i>En este acápite el Despacho procede a señalar los elementos de la responsabilidad para cada uno de los imputados, efectuando la respectiva valoración probatoria en que se fundamenta, en aplicación de lo previsto en el artículo 5° de la Ley 610 de 2000. La conducta tiene que ver con las acciones desplegadas por las personas naturales de carácter público o privado y las personas jurídicas de carácter privado, que realizan gestión fiscal, entendida esta en los términos ampliamente señalados en acápite anterior.</i></p> <p><i>Adicionalmente, y en aplicación de lo previsto en el artículo 1° de la Ley</i></p>	

EXPEDIENTE:  
MEDIO DE CONTROL:  
DEMANDANTE:  
DEMANDADA:  
ASUNTO:

2500023410002017-01946-00  
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
	<p>610 de 2000, se hace reproche fiscal también a quienes con ocasión de la gestión fiscal causen detrimento patrimonial al Estado; la expresión 'con ocasión' fue interpretada por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-840 de 2001, MP.P Jaime Araujo Rentería, como los actos que “comporten una relación de conexidad próxima y necesaria poro con el 000311 desarrollo de la gestión fiscal”</p> <p>(...)</p> <p><b>VII.</b> <b>PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA., NIT. 860.002.062-6.</b></p> <p>Según se registra en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (folios 1649 al 1658 cuaderno principal 9), esta sociedad fue creada mediante escritura pública N° 4102 del 10 de septiembre de 1947 y su objeto social está relacionado con las actividades de la ciencia contable en general.</p> <p>A través de la figura de la Oferta Mercantil para la Prestación de Servicios Profesionales de Revisoría Fiscal (folios 1236 a 1238 cuaderno principal 7), que presentó a COOMEVA EPS el día 6 de octubre de 2006 y el 17 de marzo de 2008, se vinculó con ésta para las labores propias de la revisoría fiscal, ofertas éstas que tienen carta de aprobación expedida por COOMEVA EPS S.A. de fechas 9 de octubre de 2006 y 1º de abril de 2008, respectivamente.</p> <p>El objeto de dicho acuerdo de voluntades se estableció así:</p> <p>"OBJETO.- La presente oferta mercantil tiene por objeto la</p>	

EXPEDIENTE:  
MEDIO DE CONTROL:  
DEMANDANTE:  
DEMANDADA:  
ASUNTO:

2500023410002017-01946-00  
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
PRICEWATHERHOUSECOOPERS LTDA.  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
	<p><i>realización de las funciones, asignadas por la ley y los estatutos de COOMEVA EPS SA. al Revisor Fiscal, que comprende básicamente el examen de todas las áreas, operaciones, actos, documentos registros y bienes que a su juicio profesional planifiquen el enfoque y alcance necesario para emitir un dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros de COOMEVA EPS S.A., la totalidad de las certificaciones, dictámenes, informes y comunicaciones que del revisor fiscal exigen los normas jurídicas vigentes y los estatutos.</i></p> <p><i>En el numeral segundo de las citadas ofertas mercantiles, se indicó:</i></p> <p><i>"REGIMEN LEGAL.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 43 de 1.990. EL OFERENTE desarrollará su trabajo de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, el Código de Comercio, los estatutos vigentes de COOMEVA EPS. S.A. los pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, las normas sobre entes del sector Salud y las demás disposiciones emitidas por los órganos de vigilancia y control correspondientes....</i></p> <p><i>De la misma manera, debió cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio, en especial la contenida en su numeral 7, que señala: "Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente".</i></p>	

EXPEDIENTE:

MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADA:

ASUNTO:

2500023410002017-01946-00

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
	<p>En tal sentido esta vinculada se comprometió a ejercer labores de revisoría fiscal respecto de la actividad desarrollada por COOMEVA EPS S.A. durante el periodo que se investigó, en desarrollo de las cuales desconoció la normatividad que regula el SGSSS y la contabilidad de la EPS, puesto que permitió el registro de operaciones contables contrariando lo dispuesto en el Plan Único de Cuentas establecido por la Superintendencia Nacional de Salud, lo cual se materializo en la inclusión de conceptos correspondientes a gastos administrativos no asociados a la prestación del servicio de salud en la cuenta de costos de prestación del servicio.</p> <p>Con lo anterior, propició que dichos egresos fueran sufragados con recursos parafiscales del SGSSS, destinados de manera exclusiva a la prestación de los servicios de salud incluidos en el POS.</p> <p>En tal sentido, la conducta adelantada por PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA contribuyó de manera determinante en la producción del daño por el cual serán: responsabilizados de manera solidaria los aquí vinculados, puesto que al ser desconocidas, dentro de los registros contables de COOMEVA EPS S.A., las normas del Plan Único de Cuentas contenido en la Resolución N 1804 de 2004, así como la destinación específica de los recursos del SGSSS a la prestación del servicio de salud, existe un indudable nexo de causalidad con el daño patrimonial establecido en este. Proceso.</p> <p>Así las cosas, la conducta desplegada por la referida persona jurídica tiene un nexo de causalidad directo con la ocurrencia del daño,</p>	

EXPEDIENTE:

MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADA:

ASUNTO:

2500023410002017-01946-00

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
	<p><i>puesto que el examen y revisión de las operaciones, documentos y registros contables, así como el dictamen de los estados financieros de COOMEVA EPS S.A. estaban bajo su responsabilidad, atendiendo a su calidad de revisor fiscal, adquirida a través de la suscripción de las ya referidas ofertas mercantiles suscritas con la EPS, en los que se evidenciaban los registros por los conceptos correspondientes a gastos administrativos en la cuenta del costo de la prestación del servicio de salud, situación que permitió que esos egresos, así registrados contablemente, fueran sufragados con recursos parafiscales de la salud, consumándose así el daño patrimonial al Estado que fue determinado en el desarrollo del proceso.</i></p> <p><i>En otras palabras, de haberse reprochado o no autorizado, por parte de PROCEWATERHOUSECOOPERS LTDA. al registrado contable de los conceptos por gastos no asociados a la prestación del servicio de salud en la cuenta de costos de la prestación del servicio, los pagos de dichos conceptos no se hubieran efectuado con recursos del SGSSS y, por consiguiente, no se hubiera producido el daño patrimonial que en este proceso se determinó.</i></p> <p><i>Así las cosas, este Despacho confirma la calificación a título de DOLO de la conducta desplegada por esta vinculada, atendiendo a que de manera consiente y continua, durante el periodo que se investigó, permitió que se efectuaran registros en la contabilidad de COOMEVA EPS SA. por conceptos correspondientes a gastos administrativos en la cuenta de costos de la prestación der servicio de salud, conducta ésta que</i></p>	

EXPEDIENTE:

MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADA:

ASUNTO:

2500023410002017-01946-00

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
	<p><i>produjo el daño patrimonial que se endilga en este pronunciamiento, contrariando así normas legales que regulan la destinación de los recursos parafiscales de la salud.</i></p> <p><i>Como se ha señalado en párrafos anteriores, <b>en este proceso se logró probar plenamente que la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA., en calidad de revisor fiscal de COOMEVA EPS S.A., durante los meses de octubre a diciembre de 2007 y en el año 2008, autorizó los balances y estados financieros de dicha EPS, los cuales contenían información que no se ajustaba a las normas aplicables al caso concreto,</b> puesto que en ellos se encontraban registros de gastos operacionales administrativos por conceptos no asociados a la prestación del servicio en la cuenta de costos de la prestación del servicio de salud, contrariando así el Plan Único de Cuentas vigente para ese periodo y las normas constitucionales que prevén la destinación exclusiva al servicio de salud de los recursos del SGSSS.</i></p> <p><i>Con la conducta anterior, la vinculada PRICEWATERHPUSECOOPERS LTDA. contribuyó la manera determinante en la generación del daño patrimonial al Estado que aquí se investigó, el cual está representado en la disminución de los recursos Republicas de Caparafiscales destinados a la prestación de los servicios incluidos en el plan obligatorio de Salud (POS), en cuantía de \$4.989.706.004,21, durante los meses de octubre a diciembre del año 2007, y \$22.872.314.238,78, durante todo el año 2008, lo que arroja un total de \$27.862.020.242,99, cifra que al</i></p>	



EXPEDIENTE:

MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADA:

ASUNTO:

2500023410002017-01946-00

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

PRICEWATHERHOUSECOOPERS LTDA.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
	<i>indexada asciende a \$88.860977.386,97, tal como se indicó en el acápite denominado "El Daño", por la cual debe responder de manera solidaria a resarcir el mismo.</i>	
<p>Inexistencia del daño:</p> <p>Los costos glosados por la Contraloría fueron erogaciones necesarias proporcionales, asociadas directamente con la prestación directa del servicio de salud ejecutado por Coomeva EPS, a través de sus dependencias UBAs UPREC y Puntos Coomeva.</p> <p>La Contraloría no realizó un análisis pormenorizado de cada erogación, para determinar si se generaba el desarrollo del objeto principal del ente económico (Gasto) o, como consecuencia necesaria, proporcional asociada con la prestación directa del servicio de salud por la EPS (Costo indirecto), hecho que vicia el acto administrativo en su motivación. (...)</p>	<p><b>DETERMINACIÓN DEL DAÑO FISCAL Y SU CUANTIFICACIÓN.</b></p> <p><i>El daño que se investigó en el presente proceso consistió en la lesión al patrimonio del Estado representado por el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, que se configuró por la disminución de dichos recursos durante los meses de octubre a diciembre de 2007 y el año 2008, debido a que COOMEVA EPS S.A. utilizó parte de dichos recursos para el pago de gastos no asociados a la prestación del servicio de salud contrariando las normas constitucionales que rigen su destinación específica a la prestación del servicio de salud.</i></p> <p><i>Lo anterior se materializó al registrar y cargar a la cuenta de costos de la prestación del servicio de salud, unos gastos administrativos que no tienen ninguna relación de causalidad o sean necesarios para la prestación del servicio de salud, tales como: honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, adecuaciones e Instalaciones, gastos de viaje, libros, suscripciones y periódicos, música ambiental, elementos de aseo y cafetería, útiles, papelería y fotocopias, impresiones, combustibles y lubricantes, taxis y buses, casino y restaurante, parqueadero y otros.</i></p>	



EXPEDIENTE:  
MEDIO DE CONTROL:  
DEMANDANTE:  
DEMANDADA:  
ASUNTO:

2500023410002017-01946-00  
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
	<p>La mencionada conducta es atribuible tanto a las empresas COOMEVA EPS S.A. COOMEVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. Y <b>PROCEWATERHOUSECOOPERS LTDA., como a algunas personas naturales quienes con sus actuaciones</b> destinaron o permitieron la destinación indebida de esos recursos parafiscales, afectando con ello los recursos del SGSSS destinados de manera exclusiva a la prestación del servicio de salud, lesionando la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados a la misma y generando con ello un detrimento patrimonial de los recursos parafiscales de la salud.</p> <p>Del análisis y valoración efectuada por el Despacho, respecto de todos los elementos de prueba que obran en el expediente, se pudo concluir de manera contundente que durante el periodo objeto de Investigación COOMEVA EPS S.A. destinó de manera Indebida recursos parafiscales de la salud para sufragar gastos administrativos que no tenían ninguna relación con la prestación del servicio, por los conceptos ya señalados. ocasionando así la disminución del recurso destinado a la atención de los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS.</p> <p>Puede considerarse que la adquisición de seguros de responsabilidad civil extracontractual para el personal médico se puede incluir como un costo directo o indirecto necesario en la prestación del servicio de salud?</p> <p>Así mismo, la adquisición de televisión por cable para las salas de espera de las IPS o la música ambiental o mensajes reproducidos</p>	

EXPEDIENTE:

MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADA:

ASUNTO:

2500023410002017-01946-00

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
	<p>por el PBX telefónico de las UBAS, así como los refrigerios y almuerzos suministrados al personal de dichas IPS cuando asiste a una capacitación, pueden considerarse como costos necesarios para la prestación del servicio de salud?.</p> <p>Los recursos utilizados para este tipo de egresos, nunca debieron ser recursos parafiscales cuya destinación es específica, como ya se ha señalado, debieron ser asumidos con recursos propios de la EPS, dada su naturaleza de gastos operacionales no asociados a la prestación del servicio de salud.</p> <p>Así las cosas, <b>queda claramente demostrada la existencia del daño patrimonial al Estado consistente en la disminución de los recursos parafiscales de la salud al ser, parte de éstos, utilizados por parte de COOMEVA EPS S.A. para el pago de gastos administrativos no asociados a la prestación del servicio, contraviniendo así los preceptos constitucionales y legales que exigen que dichos recursos deben ser destinados de manera exclusiva en la prestación de los servicios de salud incluidos en el A Plan Obligatorio de Salud - POS.</b></p> <p>En otras palabras, al haberse establecido plenamente que COOMEVA EPS S.A., durante el periodo que se investigó en este proceso, destinó recursos del SGSSS para el pago de gastos no asociados a la prestación del servicio de salud, con ello se produjo un daño patrimonial al Estado consistente la disminución de dichos recursos públicos destinados a la atención del POS, circunstancia esta que en términos del artículo 6° de la Ley 610 de 2000 configura el referido daño patrimonial; puesto que al ser destinados dichos recursos de forma</p>	

EXPEDIENTE:

MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADA:

ASUNTO:

2500023410002017-01946-00

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Argumentos de la parte actora	Acto demandado	Normas que considera vulneradas
	<div>diferente a la establecidas en las normas que los regulan, se produce indefectiblemente un daño patrimonial</div> <div>(...)</div>	

La medida cautelar objeto de análisis fue sustentada en tres argumentos, a saber: (i) violación de los artículos 268 numeral 5° de la Constitución Política, 1° y 3° de la Ley 610 de 2000, y 2° de la Ley 42 de 1993, 228 de la Ley 100 de 1993 y 207 del Código de Comercio al advertirse que la empresa sancionada no es sujeto de control fiscal; (ii) inexistencia de daño patrimonial y, (iii) la actuación del revisor fiscal no fue dolosa ni culposa.

La Ley 610 de 2000, “por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”, prescribe:

(...)

**ARTICULO 1o. DEFINICION.** <Ver Notas de Vigencia> <Aparte subrayado

CONDICIONALMENTE exequible> El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

(...)

**Artículo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal.** Cuando de la indagación preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En el evento en que se haya identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defensa y contradicción, deberá notificárseles el auto de trámite que ordene la apertura del proceso. Contra este auto no procede recurso alguno.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

(...)

**Artículo 41. Requisitos del auto de apertura.** El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal **deberá contener** lo siguiente:

1. Competencia del funcionario de conocimiento.
2. Fundamentos de hecho.
3. Fundamentos de derecho.
4. Identificación de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales.
5. **Determinación del daño patrimonial al Estado y estimación de su cuantía.**
6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes.
7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberán hacerse efectivas antes de la notificación del auto de apertura a los presuntos responsables.
8. Solicitud a la entidad donde el servidor público esté o haya estado vinculado, para que ésta informe sobre el salario devengado para la época de los hechos, los datos sobre su identidad personal y su última dirección conocida o registrada; e igualmente para enterarla del inicio de las diligencias fiscales.
9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decisión.

**Artículo 42. Garantía de defensa del implicado.** Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado. En todo caso, **no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea** o no está representado por un apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado.

(...)

**Artículo 48. Auto de imputación de responsabilidad fiscal.** El funcionario competente **proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados.** El auto de imputación **deberá contener:**

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

1. La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado.

2. La indicación y valoración de las pruebas practicadas.

3. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la **determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado.**

(...)

**Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal.** El funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable. **Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado**, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes.

(...)." (Negritas fuera de texto).

Tal como se advierte de la normativa en cita, le corresponde a la Contraloría dentro de la actuación administrativa determinar y establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta causen por acción u omisión daño patrimonial al Estado, ya sea a título de dolo o culpa grave.

Dicha responsabilidad se aplica luego de analizar los hechos, actos u omisiones constitutivos del daño ocasionado al patrimonio del Estado a título de dolo o culpa, lo cual implica que durante el proceso deben adelantarse las etapas correspondientes con el fin de recaudar pruebas y garantizar el derecho al Debido Proceso de los investigados.

Respecto del alcance del concepto de gestión fiscal y de los sujetos pasivos del proceso de responsabilidad fiscal, es preciso jurisprudencia del H. Consejo de Estado Exp. 05001-23-31-000-1997-2093-01, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la que se señaló:

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

“Cabe señalar que la Ley 42 de 1993, a diferencia de lo que sucede con la Ley 610 de 2000, no consagra una definición de gestión fiscal; empero nada impide a la Sala acudir al concepto que sobre el tema trae la referida Ley 610 **“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías”**.

“El artículo 3º de dicha Ley prevé:

*“Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, **se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”***.

De la definición transcrita deduce la Sala que **el sujeto pasivo en el proceso de responsabilidad fiscal son los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, cuando al realizar la gestión fiscal, a través de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas no han dado una adecuada planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los mismos, o a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas, causando por ende con ello detrimento patrimonial al Estado.**

Es oportuno traer a colación apartes de la sentencia C-840 de 9 de agosto de 2001, de la Corte Constitucional al examinar la exequibilidad de algunas normas de la mencionada Ley:

“(…)

### 3. *Naturaleza y sentido del concepto de Gestión Fiscal.*

Al amparo de la nueva concepción que sobre control fiscal incorpora la Constitución de 1991, la ley 610 de 2000 prescribe en su artículo 3 la **noción de gestión fiscal**... Como bien se aprecia, **se trata de una definición que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario público puestos a su cargo.** Siendo patente que en la medida en que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

servidores públicos, a tiempo que contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los fines del Estado.

*Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de control fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos a vigilar, esto es, **tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores.** Lo cual es indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólido o con criterio universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente. Circunstancia por demás importante si se tienen en cuenta las varias modalidades de asociación económica que suele asumir el Estado con los particulares en la fronda de la descentralización por servicios nacional y/o territorial. **Eventos en los cuales la actividad fiscalizadora podrá encontrarse con empleados públicos, trabajadores oficiales o empleados particulares<sup>1</sup>, sin que para nada importe su específica condición cuando quiera que los mismos tengan adscripciones de gestión fiscal dentro de las correspondientes entidades o empresas.***

Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera de la gestión fiscal constituye el elemento vinculante y determinante de las responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado por parte de los servidores públicos y de los particulares. Siendo por tanto indiferente la condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de establecer responsabilidades fiscales se trata.

#### **4. El proceso de responsabilidad fiscal.**

El proceso de responsabilidad fiscal se fundamenta en el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución, según el cual el Contralor General de la República tiene la atribución de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, facultades que a su vez tienen asiento en la función pública de vigilancia y control sobre la gestión fiscal que realicen los servidores públicos o los particulares en relación con los bienes y recursos estatales puestos a su cargo. Funciones éstas que por igual se predicen de las contralorías territoriales (art. 272, inc. 6º C.P.).

Conforme a lo anterior, las competencias que asisten a todas las contralorías se expresan a través de dos momentos teleológicamente concatenados, sin que el segundo de ellos deba darse necesariamente en todos los casos. Es decir, en un primer momento las contralorías realizan el control fiscal dentro de sus respectivas jurisdicciones, formulando al efecto las correspondientes observaciones, conclusiones, recomendaciones, y llegado el caso, las glosas que puedan derivarse del examen de los actos de gestión fiscal seleccionados. Si con ocasión de esa vigilancia, en forma inmediata o posterior surge alguna información concerniente a hechos u omisiones eventualmente constitutivos de daño fiscal, procede la iniciación,

---

<sup>1</sup> Tal como ocurre en relación con los empleados de las empresas de servicios públicos mixtas; y de las empresas de servicios públicos privadas que incorporen aportes estatales. (arts. 14, numerales 6 y 7, y 41 de la ley 142/94).

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

trámite y conclusión del segundo momento, esto es, del proceso de responsabilidad fiscal. El cual, en todo caso, está sujeto a la oportunidad que le otorgan las figuras de la caducidad y la prescripción.

**Dicho proceso permite establecer la responsabilidad de quien tiene a su cargo bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia de los entes de control, con miras a lograr el resarcimiento de los daños causados al erario público.** De esta forma, el proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el sentido **de que un determinado servidor público, o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares en que haya podido incurrir, de manera dolosa o culposa, en la administración de los dineros públicos**<sup>2</sup>.

*El proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza administrativa;<sup>3</sup> de ahí que la resolución por la cual se decide finalmente sobre la responsabilidad del procesado constituya un acto administrativo que, como tal, puede ser impugnado ante la jurisdicción contencioso administrativa.*

*En este orden de ideas la responsabilidad que se declara a través del proceso fiscal es eminentemente administrativa, dado que recae sobre la gestión y manejo de los bienes públicos; es de carácter subjetivo, porque busca determinar si el imputado obró con dolo o con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente, porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y, finalmente, en su trámite deben acatarse las garantías del debido proceso<sup>4</sup> según voces del artículo 29 Superior.*

(...)

Frente al tema en estudio resulta ilustrativo el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, expresado dentro del Radicado núm. 1522 (4 de agosto de 2003, Consejero ponente doctor Flavio Rodríguez Arce), en el cual se precisó lo siguiente:

(...)

<sup>2</sup> Op. Cit. SU 620 de 1996

<sup>3</sup> Ciertamente, la Corte ha entendido que los órganos de control llevan a cabo una administración pasiva que consiste en la verificación de la legalidad, eficacia y eficiencia de la gestión de la administración activa, esto es, aquella que es esencial y propia de la rama ejecutiva, aunque no exclusiva de ella, pues los otros órganos del Estado también deben adelantar actividades de ejecución para que la entidad pueda cumplir sus fines. En este sentido, "la atribución de carácter administrativo a una tarea de control de la Contraloría no convierte a esa entidad en un órgano de administración activa, puesto que tal definición tiene como único efecto permitir la impugnación de esa actuación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (...) Es pues una labor en donde los servidores públicos deciden y ejecutan, por lo cual la doctrina suele señalar que al lado de esa administración activa existe una administración pasiva o de control, cuya tarea no es ejecutar acciones administrativas sino verificar la legalidad y, en ciertos casos, la eficacia y eficiencia de gestión de la administración activa." Sentencia C-189 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver también Op Cit. SU 620 de 1996, C-540 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara

<sup>4</sup> En la sentencia varias veces citada SU 620 de 1996 se establece el alcance del derecho al debido proceso en el proceso de responsabilidad fiscal, en los siguientes términos: "la norma del artículo 29 de la Constitución es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o legal (autoridad administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, (derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del debido proceso, y a interponer recursos contra la decisión condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y no ser juzgado dos veces por el mismo hecho."



EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

**Control y gestión fiscal. Responsabilidad fiscal.-** El control fiscal es una función pública que tiene por objeto la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos, ejercida por la Contraloría General de la República<sup>5</sup>, las contralorías territoriales y la Auditoría General, que se cumple mediante el ejercicio del control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales, en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establece la ley ( art. 267 de la C.P.).

Para el cumplimiento de esta función, se asigna a los organismos de control la atribución de establecer **la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal**, imponer las sanciones que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma ( art. 268.5 de la C.P.).

**Para deducir responsabilidad fiscal, es preciso que la conducta reprochable se haya cometido en ejercicio de la gestión fiscal, definida en el artículo 3° de la ley 610 de 2000 así:**

“Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”.

De ésta definición legal de gestión fiscal <sup>6</sup>, armonizada con las disposiciones siguientes de la ley 610 y dada su inescindible interrelación, se desprenden

<sup>5</sup> El artículo 119 constitucional señala que “La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración”. En la Asamblea Nacional Constituyente. Informe – ponencia se precisó que “...la función fiscalizadora es de interés primordial del Estado, en cuanto tiene que ver con el correcto manejo de las finanzas públicas que son objeto de su atención. Los caudales o recursos que tienen las actividades gubernamentales provienen del pueblo y a él deben revertir en forma de servicios. (...) la Contraloría representa a la sociedad en cuanto que es ella la titular de sus finanzas en último término, pues en principio lo son del Estado. Vela porque los recursos que le proporciona al Estado estén correctamente manejados”. ( Gaceta Constitucional 59, jueves 25 de abril de 1991 )

<sup>6</sup> Sobre el concepto de gestión fiscal, esta Sala expresó en la Radicación No 848 de 1996 : “Gestión fiscal es, entonces, **el conjunto de actividades económico jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, o disposición de los bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines de éste y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado.** Dentro del género de entidades públicas queda comprendido el Banco de la República.” Por su parte la Corte Constitucional en la sentencia C- 529 de 1993 señala: “...**el concepto de gestión fiscal alude a la administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición.**” “Consignientemente, la vigilancia de la gestión fiscal se endereza a establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados o señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran recursos públicos

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

múltiples consecuencias: determina el objeto de la gestión; se tiene en cuenta para establecer el alcance, objeto y elementos de la responsabilidad fiscal, esto es, el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal (arts. 4° y 5°), así como la causación de un daño patrimonial al Estado producida por una **gestión fiscal** antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna ( art. 6° ).<sup>7</sup>

Así mismo, sirve para estructurar el concepto de proceso de responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, **cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta causen, por acción u omisión, un daño al patrimonio del Estado** (art. 1°).<sup>8</sup>

La acción fiscal cesará cuando se demuestre que el hecho no comporta el ejercicio de gestión fiscal y, por tanto resulta procedente dictar auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal (arts. 16 y 47); sin embargo, de existir efectiva lesión al patrimonio del Estado, habrá lugar a exigir la correspondiente responsabilidad patrimonial por otra vía, como se verá más adelante.

**En consecuencia, se deduce responsabilidad fiscal por la afectación del patrimonio público en desarrollo de actividades propias de la gestión fiscal o vinculadas con ella, cumplida por los servidores públicos o los particulares que administren o manejen bienes o recursos públicos.** Al respecto la Corte Constitucional, al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 1°<sup>9</sup> de la ley 610, señaló:

“El sentido unitario de la expresión **o con ocasión de ésta** sólo se justifica en la medida en que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal.

---

y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la administración (Ley 42 de 1993, arts. 8° a 13”).

<sup>7</sup> Sent. C- 840/01: “...**el circuito de la gestión fiscal involucra a todos los servidores públicos que tengan poder decisorio sobre los bienes o rentas del Estado**. Criterios éstos que en lo pertinente cobijan a los particulares que manejen fondos o bienes del Estado (...). Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de control fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos a vigilar, esto es, **tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores**. Lo cual es indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólido o con criterio universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

<sup>8</sup> Sent. C- 840/01: “**Dicho proceso permite establecer la responsabilidad de quien tiene a su cargo bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia de los entes de control**, con miras a lograr el resarcimiento de los daños causados al erario público. De esta forma, el proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el sentido de que un determinado servidor público, o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares en que haya podido incurrir, de manera dolosa o culposa, en la administración de los dineros públicos Op. Cit. SU 620 de 1996. (...) la responsabilidad que se declara a través del proceso fiscal es eminentemente administrativa, **dado que recae sobre la gestión y manejo de los bienes públicos**; es de carácter subjetivo, porque busca determinar si el imputado obró con dolo o con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente, porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y, finalmente, en su trámite deben acatarse las garantías del debido proceso.” // V. sent. C- 477/01. (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

<sup>9</sup> “Artículo 1°. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.” (El aparte subrayado fue declarado condicionalmente exequible en la sentencia C- 840/01)

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica de **gestión fiscal**, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción, programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición y gasto, entre otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en sus respectivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos y los particulares responsables del manejo de fondos o bienes del Estado.

De acuerdo con esto, la locución demandada ostenta un rango derivado y dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente dicha, siendo a la vez manifiesto su carácter restringido en tanto se trata de un elemento adscrito dentro del marco de la tipicidad administrativa. De allí que, según se vio en párrafos anteriores, el ente fiscal deberá precisar rigurosamente el grado de competencia o capacidad que asiste al servidor público o al particular en torno a una específica expresión de la gestión fiscal, descartándose de plano cualquier relación tácita, implícita o analógica que por su misma fuerza rompa con el principio de la tipicidad de la infracción. De suerte tal que sólo dentro de estos taxativos parámetros puede aceptarse válidamente la permanencia, interpretación y aplicación del segmento acusado.

Una interpretación distinta a la aquí planteada conduciría al desdibujamiento de la esencia propia de las competencias, capacidades, prohibiciones y responsabilidades que informan la gestión fiscal y sus cometidos institucionales.

Consecuentemente, **si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza de quienes en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en forma dolosa como culposa.** Y es que no tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios. La defensa y protección del erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las tareas públicas. **Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales.** (Negrillas y subrayas son del texto)

De conformidad con el antecedente jurisprudencial, el órgano estatal, como ente de control fiscal, tiene que identificar quiénes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores o particulares.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

Para establecer la responsabilidad fiscal, se requiere examinar si la conducta comporta gestión fiscal o guarda alguna relación de conexidad con ésta.

En el caso sometido a examen, no es posible, en esta etapa preliminar del proceso, suspender el acto acusado, máxime cuando el proceso de responsabilidad fiscal, dada su complejidad, requiere de un mayor análisis fáctico, jurídico y probatorio el cual solo es posible surtir con audiencia de todas las partes y una vez evacuadas las etapas procesales.

En el escrito de medida, tal como se ha dicho, la parte demandante plantea un debate que requiere confrontación de los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que se alleguen al expediente, y sea resuelto en la sentencia.

Siendo ello así, la valoración de los cargos de la demanda constituye etapa procesal exclusiva de la sentencia, y encontrándose entonces que de la sola confrontación de las normas con la decisión demandada, el despacho no encuentra acreditada la abierta contradicción, que permita declarar la suspensión provisional.

Si bien el actor alega la existencia de un perjuicio irremediable que se le está causando, consistente en la imposición del pago de una suma de dinero que según este no se encuentra obligado a pagar; dicho perjuicio no constituye un elemento suficiente para acceder a la medida cautelar, dado que conforme al artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 se requiere, en primer lugar, encontrar probada la violación de las disposiciones invocadas, cuestión que no se observa en el presente caso, de acuerdo con el estado actual del proceso.

Por otra parte, la actora reclama la suspensión provisional del acto administrativo contenido en el Auto No. 001 de 28 de enero de 2022, por el cual se ordenó el embargo y retención de dineros depositados o que se lleguen a depositar en las cuentas la demandante.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

En lo que respecta a la afirmación del demandante consistente en que los actos administrativos acusados configuran un perjuicio económico a la sociedad PricewaterhouseCoopers Ltda., debido a que la Contraloría podría iniciar proceso administrativo de cobro coactivo por el valor de la sanción impuesta y materializar la práctica de medidas cautelares, afectando la situación económica de la demandante, se observa que el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011, dispone lo siguiente:

***“(…) ARTÍCULO 101. CONTROL JURISDICCIONAL. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito. La admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye el título ejecutivo no suspende el procedimiento de cobro coactivo. Únicamente habrá lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo:***

- 1. Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y*
- 2. A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las excepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, esté pendiente el resultado de un proceso contencioso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Esta suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide el decreto y práctica de medidas cautelares.*

**PARÁGRAFO.** Los procesos judiciales contra los actos administrativos proferidos en el procedimiento administrativo de cobro coactivo tendrán prelación, sin perjuicio de la que corresponda, según la Constitución Política y otras leyes para otros procesos. (...)” (subrayado fuera de texto)

Tal como se observa, existe expresa prohibición legal para declarar la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado en virtud de lo dispuesto en los actos administrativos demandados, proferidos por la Contraloría, por lo que, no es del caso acceder a la solicitud del actor tal sentido.

Si bien es cierto, existe una consecuencia patrimonial para la demandante a casusa del fallo de responsabilidad fiscal proferido en contra de la demandante, también lo es que las medidas adoptadas por la Contraloría resultan plenamente validas, pues la declaratoria de responsabilidad fiscal, tiene como finalidad esencial el resarcimiento de

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

los daños ocasionados al patrimonio público consecuencia de un detrimento que se le haya causado.

En consecuencia, la disminución del patrimonio de la sociedad demandante que pueda ocasionar su eventual disolución no deviene del actuar ilegal del órgano de control, sino más bien del uso de las facultades que le ha conferido el legislador en procura del resarcimiento económico por el daño causado. Así entonces, hasta este momento procesal los actos administrativos proferidos por la Contraloría gozan de plena validez, hasta tanto se demuestre lo contrario.

Será entonces en la sentencia la oportunidad para la valoración probatoria y calificar la prosperidad de los cargos.

Por demás, tal como se indica en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, la presente decisión no constituye prejuzgamiento.

En mérito de lo expuesto, El Despacho,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO:**     **DENIÉGASE** la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados, por las razones expresadas en la presente providencia.

**SEGUNDO.-**   **DECLÁRASE IMPROCEDENTE** la solicitud de suspensión provisional del Auto No. 001 de enero 28 de 2016, por medio del cual la Contraloría ordenó el embargo y retención de dineros depositados o que se lleguen a depositar en las cuentas de la demandante, por las razones expresadas en la presente providencia.

La presente decisión no constituye prejuzgamiento.

EXPEDIENTE:	2500023410002017-01946-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
DEMANDADA:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE MEDIDA CAUTELAR

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA**  
**Magistrado**

La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI por el magistrado Felipe Alirio Solarte Maya. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN PRIMERA  
SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022)

**Magistrado Ponente:** OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS  
**Expediente:** No. 25000-23-41-000-2017-01966-00  
**Demandantes:** SANDRA MOYA MENDOZA  
**Demandados:** CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
**Referencia:** MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO  
**Asunto:** FIJA FECHA AUDIENCIA DE PRUEBAS

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 508 Cdno. no.1), el Despacho dispone:

**1.** Córrase traslado a las partes por el término de (5) días de las siguientes documentales **i)** pruebas trasladadas de los expedientes Nos. 25000-23-41-000-2017-01825-00 demandante: Fernando Panesso Serna y 25000-23-41-000-2017-01967-00 demandante: Piedad Cecilia Pineda que cursan en los despachos de los Magistrados Moisés Rodrigo Mazabel y Cesar Giovanni Chaparro y **ii)** información allegada por la Contraloría General de la República en cumplimiento a lo ordenado en audiencia inicial de 9 de julio de 2021 (fl. 499 *ibídem*)

**2.** Cumplido el término anterior, y conforme con lo establecido en el artículo 181 de la ley 1437 de 2011 **fíjase** como fecha para la realización de la **audiencia de pruebas** dentro del proceso de la referencia para el **once (11) de octubre de 2022 a las (9:00 am)**, que tendrá lugar de manera virtual.

El *link* respectivo, será enviado a los correos electrónicos aportados por los apoderados de las partes para efectos de la notificación respectiva y al Agente del Ministerio Público. Basta con dar *click* sobre el vínculo respectivo para unirse a la Audiencia en la fecha y hora indicadas.



Expediente: No. 25000-23-41-000-2017-01966-00  
Demandante SANDRA MOYA MENDOZA  
Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento

Con el fin de llevar a cabo de manera eficiente la diligencia citada, se solicita a las partes allegar al correo del Despacho [s01des02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co](mailto:s01des02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co), con al menos una hora de antelación, los documentos que deban ser incorporados a la misma, a saber: 1) poderes y sustituciones; 2) Cédula de Ciudadanía y Tarjetas Profesionales de los apoderados de las partes y de sus apoderados; y 3) Número telefónico de contacto al que pueda comunicarse el Despacho en caso de alguna novedad antes o durante la audiencia.

De igual manera, se solicita a las partes, unirse a la correspondiente audiencia a las 8:30 a.m. del día de la citación, con el fin de llevar a cabo la preparación de esta, identificar a las partes y hacer unas recomendaciones logísticas para la diligencia.

En atención a que el expediente se encuentra en físico, se concede un término de cinco (5) días a las partes, con el fin de que en este plazo los sujetos procesales puedan coordinar con la Secretaría de la Sección Primera el acceso a las piezas procesales que estimen pertinentes.

**3.** Ejecutoriado este auto y cumplido lo anterior, regrese el expediente al Despacho para continuar con el trámite procesal correspondiente, contra esta decisión no procede recurso alguno.

## **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS**  
**Magistrado**  
**Firma Electrónica**

**Nota:** La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Sustanciador, integrante de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca subsección "B" en la plataforma denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de CPACA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN PRIMERA  
SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de agosto de dos mil veintidós (2022)

<b>Magistrado Ponente:</b>	<b>CÉSAR GIOVANNI CHAPARRO RINCÓN</b>
<b>Expediente:</b>	<b>25000-23-41-000-2018-00821-00</b>
<b>Demandantes:</b>	<b>DIOFAR RANGEL QUINTANA Y OTROS</b>
<b>Demandados:</b>	<b>NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS</b>
<b>Medio de control:</b>	<b>REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO DE PERSONAS</b>
<b>Asunto:</b>	<b>CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN</b>

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 103 del cdno. ppal.), el despacho **dispone** lo siguiente:

**1 °) Conceder** ante el Consejo de Estado el recurso de apelación presentado oportunamente por la parte actora en el asunto (fls. 92 a 100 del cdno. ppal.) contra el auto del 30 de agosto de 2019, mediante el cual se rechazó la demanda por haber operado la caducidad frente a los hechos ocurridos entre el 1 ° de enero de 1985 hasta el 15 de mayo de 2017 y, no haberse dado cumplimiento al requisito de procedencia contemplado en el artículo 46 de la Ley 472 de 1998 (fls. 85 a 90 del cdno. ppal.).

**2°)** Ejecutoriado este auto, previas las constancias secretariales del caso **remitir** el expediente al superior.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**CÉSAR GIOVANNI CHAPARRO RINCÓN**  
**Magistrado**  
**(firmado electrónicamente)**

*Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.*

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA**  
**SECCIÓN PRIMERA**  
**SUBSECCIÓN “A”**

Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintidós (2022)

**Magistrado Ponente: LUIS MANUEL LASSO LOZANO**

**Referencia:** Exp. N° 250002341000201900034-00

**Demandante:** MIRYAM LUCÍA ARÉVALO BALBUENA

**Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU

**MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
(Ley 388 de 1997)**

**Asunto:** Reprograma fecha para audiencia

Mediante auto de 31 de mayo de 2022, se fijó el 21 de junio de 2022, como fecha para llevar a cabo la audiencia de contradicción del dictamen pericial elaborado por la perito Mar Luz Villegas Contreras.

Sin embargo, mediante auto de 17 de junio de 2022, se aplazó la audiencia prevista para el 21 de junio de 2022, por solicitud de la parte demandada

Por lo tanto, se fijará el 29 de agosto de 2022 a las 10:00 a.m. como nueva fecha para realizar la audiencia de contradicción del dictamen pericial, de manera mixta (presencial y virtual), en la Sala de Audiencias No.10.

A través del siguiente *link* los sujetos procesales podrán unirse de manera virtual a la Audiencia en la fecha y hora indicada, basta con dar *click* sobre el vínculo respectivo (<https://call.lifesizecloud.com/15384745>).

Con el fin de llevar a cabo de manera eficiente la diligencia citada, se solicita a las partes que asistirán a la audiencia de manera virtual, allegar al correo del Despacho, especialmente creado para audiencias: [audienciass01des06tac@hotmail.com](mailto:audienciass01des06tac@hotmail.com), con al menos una hora de antelación, los documentos que deban ser incorporados a la misma, a saber.

1) poderes y sustituciones; 2) cédula de ciudadanía y tarjeta profesional de las partes y de sus apoderados; y 3) número telefónico de contacto al que pueda comunicarse el Despacho en caso de alguna novedad, antes o durante la audiencia.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Firmado electrónicamente  
**LUIS MANUEL LASSO LOZANO**  
Magistrado

La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI por el Magistrado Luis Manuel Lasso Lozano. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, conforme al artículo 186 de la Ley 1437 de 2011.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN PRIMERA  
SUBSECCIÓN B**

Bogotá D.C, cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**Magistrado Ponente:** OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS  
**Radicación:** 25000-23-41-000-2019-00200-00  
**Demandante:** JOSE MARÍA LUQUE Y OTROS  
**Demandado:** AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
**Medio de control:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**Asunto:** ACEPTA RETIRO DE LA DEMANDA

Decide el Despacho la solicitud de retiro de la demanda presentada por la parte demandante (fls. 144 a 146 Cdno. Ppal.).

**I. ANTECEDENTES**

1) Por intermedio de apoderado judicial, el señor JOSÉ MARIA LUQUE interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos contenidos las resoluciones Nos. **i) 834 de 18 de mayo de 2018**, expedida por la ANI “*que dispuso dar inicio al trámite judicial de expropiación de la porción del LOTE DE RESERVA VILLA POZO AZUL II*” **ii) 1289 de 18 de julio de 2018** que resolvió recurso de reposición, proferidas por la Agencia Nacional de Infraestructura.

2) Por auto de 20 de agosto de 2019 el Despacho ordenó oficiar a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para que remitiera constancia de notificación de los actos administrativos demandados.

3) La Secretaría de la Sección requirió a la entidad para que cumpliera con la orden impartida a través de los oficios de 27 de agosto de 2019 y 26 de septiembre de 2019.

4) Luego en atención a la respuesta emitida por la ANI, (fl. 126 y 127 ibídem) y como quiera que la información fue allegada de manera incompleta, se dispuso oficiar nuevamente a dicha entidad para que remitiera la notificación del acto administrativo No. 1289 de 18 de julio de 2019 que agotó la vía gubernativa.

5) Posteriormente a través de memorial radicado por la parte actora visible a folios 144 a 146 ibídem, solicitó el retiro de la demanda objeto de estudio.

## II. CONSIDERACIONES

1) Al respecto el artículo 92 del Código General del Proceso señala:

***“Artículo 92. Retiro de la demanda** El demandante podrá retirar la demanda mientras no se haya notificado a ninguno de los demandados. Si hubiere medidas cautelares practicadas, será necesario auto que autorice el retiro, en el cual se ordenará el levantamiento de aquellas y se condenará al demandante al pago de perjuicios, salvo acuerdo de las partes.”(...)*

2) En relación con lo anterior, la norma en cita permite que la parte demandante presente el retiro de la demanda siempre y cuando no se hubiera notificado los demandados.

3) En el asunto *sub examine*, se tiene que el proceso se encontraba en espera de que fuera remitida la constancia de notificación del acto administrativo a través de la cual se agotó la vía gubernativa, para proceder al estudio de la demanda y la oportunidad de presentación de la misma, por lo que la misma no había sido admitida y notificada a las partes.

4) Ahora bien, se advierte conforme a los poderes visibles a folios 13 a 23 del cuaderno principal, que el apoderado judicial LUIS FERNANDO VÉLEZ ESCALLÓN, se encuentra expresamente facultado dentro del proceso para solicitar el retiro de la demanda y el desistimiento de las pretensiones incoadas. En consecuencia, como la solicitud cumple con los presupuestos previstos en la norma, el Despacho aceptará el retiro de la demanda.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B,**

Expediente No. 25000-23-41-000-2019-00200-00  
Actor: JOSE MARÍA LUQUE Y OTROS  
Nulidad y restablecimiento del derecho

## **R E S U E L V E:**

**1) ACÉPTASE** el retiro de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por JOSE MARÍA LUQUE Y OTROS.

**2)** En firme esta providencia, **archívese** el expediente con las respectivas constancias secretariales.

## **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS**  
**Magistrado**  
**firmado electrónicamente**

**Nota:** La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de CPACA.

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA**

**-SECCIÓN PRIMERA-**

**-SUBSECCIÓN “A”-**

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintidós (2022)

**MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO**

<b>Expediente:</b>	<b>25 000-23-41-000-2022-00637-00</b>
<b>Demandante:</b>	<b>ESPERANZA NOPE ALFONSO</b>
<b>Demandado:</b>	<b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE CULTURA, GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y OTROS</b>
<b>Medio de control:</b>	<b>PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS</b>

---

**Asunto: Inadmite demanda.**

Visto el informe secretarial que antecede y revisado el expediente, procede el Despacho a estudiar sobre la admisión de la demanda.

**I. ANTECEDENTES**

La señora **ESPERANZA NOPE ALFONSO** actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, presentó demanda contra **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE CULTURA, GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ, ALCALDIA DE TIBATÁ, CONCEJO MUNICIPAL DE TIBATÁ Y OTROS**, por la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos *“atención de la salud y saneamiento ambiental, patrimonio cultural dela nación, derecho al medio ambiente, derecho a conservar el patrimonio cultural e histórico de la nación, derecho a que se respete la voluntad del pueblo, derecho a que prevalezca el interés general, derecho que se facilite la participación de todos en las decisiones en la vida cultural del pueblo, derecho al debido proceso, derecho a la información, derecho a la salud, educación, seguridad, saneamiento básico, erradicación de la pobreza, derecho a servicios públicos de calidad, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia técnica, derecho a salvaguardar el patrimonio cultural e*

*histórico”, causado a juicio de la accionante, por la expedición del Acuerdo N° 03 de 2022, “ por medio del cual se crea un rubro para la adición de recursos al presupuesto de ingresos y gastos del municipio de tabaná para la vigencia fiscal 2022”, por parte del Concejo municipal, y el proceso contractual de construcción de adecuación del parque principal del municipio de Tibaná, con una inversión de mil trescientos diecisiete millones ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y un pesos m/cte ( \$1.317.146.331), cuando el deber de la administración, es dar prioridad a satisfacer los servicios esenciales y necesidades de la población.*

La demanda tiene las siguientes pretensiones:

*“[...]*

**PRIMERO:** *Se declare que el proyecto “mejoramiento y adecuación parque principal, municipio de Tibaná, Boyacá”, vulnera los derechos colectivos de la población de Tibaná – Boyacá*

**SEGUNDO.** *En consecuencia, se ordene a la administración departamental y local abstenerse de continuar desarrollando el proceso de contratación y adjudicación del proyecto.*

**TERCERO.** *Ordenar a la administración departamental y municipal que se garantice que el patrimonio cultural y arquitectónico del parque principal de Tibaná- Boyacá se preserve.*

**CUARTO.** *Se ordene a la administración departamental y local a atender los principios de necesidad y prioridad en los proyectos en los cuales se invierta el erario.*

**QUINTO.** *Se llame a la administración departamental y local a convocar espacios participativos de conservación municipal donde se definan las necesidades urgentes del municipio.*

*[...]”*

La demanda fue radicada inicialmente ante los juzgados administrativo del circuito judicial de Bogotá, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Quince Administrativo – Sección Segunda.

Mediante providencia del 24 de mayo de 2022, el Despacho de conocimiento advirtió la falta de competencia para conocer del asunto, por estar dirigida la demanda contra entidades del orden nacional, disponiendo en consecuencia la remisión del proceso a este Tribunal.

## II. CONSIDERACIONES

Estudiada la demanda de la referencia el Despacho identifica algunas falencias que impiden su admisión:

1. Esta carece de la reclamación administrativa como requisito de



procedibilidad previo para demandar dentro del presente medio control, tal como lo establece el artículo 161 numeral 4° del CPACA a saber:

“[...]

**Artículo 161. Requisitos previos para demandar.** La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

[...]

**4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.**

[...]”.

A su vez el artículo 144 ibídem dispone:

“[...]

**Artículo 144.- Protección de los derechos e intereses colectivos.** Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.

**Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.** (Resaltado fuera del texto original).

La reclamación a la que se refiere el artículo 144 *ejusdem*, consiste en que antes de presentar el medio de control, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado.

Revisada la demanda y sus anexos, no se encuentra el Despacho que sea aportada como parte del material probatorio, copia de la reclamación administrativa de que trata el citado artículo 144,

presentada por la accionante ante las entidades accionadas con el fin de que adoptaran las medidas de protección frente a la presunta vulneración de los derechos invocados.

En esa medida, deberá acreditar el cumplimiento del requisito de procedibilidad frente a las entidades accionadas; advirtiéndole en todo caso, que tal reclamación debió haberse efectuado de manera previa a la presentación de esta demanda y que la misma, debe guardar relación con los hechos, pretensiones y los derechos e intereses colectivos que aquí se invocan.

Por lo anterior, el Despacho procederá a inadmitir la demanda, para que sea corregida por el accionante en el término de tres (3) días, so pena de rechazo de la misma, tal como lo prevé el inciso 2.º del artículo 20 de la Ley 472 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Despacho

### RESUELVE

**PRIMERO: INADMÍTASE** la demanda presentada por la señora **ESPERANZA NOPE**, para que sea corregida en el término de tres (3) días, so pena de rechazo de la misma, según lo expuesto en la parte motiva

**SEGUNDO: COMUNÍQUESE** esta decisión a los correos electrónicos señalados por la parte actora para efectos de notificaciones.

**TERCERO:** Vencido el término, **INGRÉSESE** el expediente al Despacho para lo pertinente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE<sup>1</sup>**

(firmado electrónicamente)  
**CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO**  
Magistrada

---

<sup>1</sup> CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Doctora Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, Magistrada de la Sección Primera Subsección "A" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI; en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA**

**-SECCIÓN PRIMERA-**

**-SUBSECCIÓN “A”-**

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintidós (2022)

**MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO**

<b>Expediente:</b>	<b>25 000-23-41-000-2022-00702-00</b>
<b>Accionante</b>	<b>HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA</b>
<b>Demandado:</b>	<b>NACIÓN – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ALFREDO RANGEL SUAREZ (EX - EMBAJADOR DE NICARAGUA)</b>
<b>Medio de control:</b>	<b>PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS</b>

---

**Asunto: Inadmite demanda.**

Visto el informe secretarial que antecede y revisado el expediente, procede el Despacho a estudiar sobre la admisión de la demanda.

**I. ANTECEDENTES**

El señor **HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA**, en nombre propio y en ejercicio del medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, presentó demanda contra **NACIÓN – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ALFREDO RANGEL SUAREZ ( EX -EMBAJADOR DE NICARAGUA)**, por la presunta vulneración del derecho e intereses colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público causado a juicio, en síntesis por los pagos salariales y prestacionales realizados al señor Rangel, luego de que el Gobierno de Nicaragua le hubiese retirado sus credenciales como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de la República de Nicaragua.

En la demanda se tienen como pretensiones las siguientes:

*“[...]”*

*Con el debido respeto solicito al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia a de fondo, declarar transgredidos por el accionado los derechos e interés invocados y declarar el amparo de*

*los mimos o impartiendo las siguientes – o similares órdenes:*

*PRIMERO.- Que se declare que la entidad accionada vulneró los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.*

*SEGUNDO.- Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al Sr ALFREDO RANGEL SUAREZ Y/O AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, se sirva adelantar las gestiones que correspondan para que eu(sic) voluntariamente el primero o de no hacerlo el segundo las adelante ante el Sr, ALFREDO RANGEL SUAREZ y/o los organismos de control con el fin de que se le retorne al PATRIMONIO PÚBLICO los pagos que durante el año 2022 se le hubiesen hecho al SR. ALFREDO RANGEL SUÁREZ luego de que el Gobierno de Nicaragua le hubiese retirado las credenciales como embajador en ese país, vale decir, entre el 23 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2022, incluyendo los intereses y/o la correspondiente indexación calculada desde el momento en que se le hicieron los pagos indebidos y el momento de su retorno, incluyendo los pagos que por el mismo lapso en que ya no era embajador se le hubiesen hecho por concepto de la seguridad social, los parafiscales, las prestaciones de Ley y la porción de la liquidación laboral del lapso indicado.*

*TERCERO.- Que así mismo se ordene al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES se abstenga de continuar con la práctica de designar en los más altos cargos del servicio diplomático a personal inidóneo, estableciendo unos requisitos mínimos que incluyan cuando menos conocimientos y/o experiencia en materia de diplomacia y/o relaciones exteriores con el fin que sean adecuadamente representados los intereses del Estado así como que se brinde una adecuada protección y asistencia a los Colombianos en el exterior, a fin de que la Carrera Diplomática y Consular se adecúe verdaderamente a un régimen especial y jerarquizado, basado en el mérito, privilegiándose su ingreso mediante concursos públicos.*

*CUARTO.- Se condene en costas a los demandados*

*[...]"*

## **II. CONSIDERACIONES**

Estudiada la demanda de la referencia el Despacho identifica algunas falencias que impiden su admisión:

1. En cuanto a las pretensiones de la demanda, el Despacho advierte lo siguiente:

El accionante solicita: I) Que se declare que la entidad accionada vulneró los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público. II) Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al Sr ALFREDO RANGEL SUAREZ Y/O AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, se sirva adelantar las gestiones que correspondan para que voluntariamente el

primero o de no hacerlo el segundo las adelante ante el Sr, ALFREDO RANGEL SUARÉZ y/o los organismos de control con el fin de que se le retorne al PATRIMONIO PÚBLICO los pagos que durante el año 2022 se le hubiesen hecho al SR. ALFREDO RANGEL SUÁREZ luego de que el Gobierno de Nicaragua le hubiese retirado las credenciales como embajador en ese país, vale decir, entre el 23 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2022, incluyendo los intereses y/o la correspondiente indexación calculada desde el momento en que se le hicieron los pagos indebidos y el momento de su retorno, incluyendo los pagos que por el mismo lapso en que ya no era embajador se le hubiesen hecho por concepto de la seguridad social, los parafiscales, las prestaciones de Ley y la porción de la liquidación laboral del lapso indicado. III) Que así mismo se ordene al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES se abstenga de continuar con la práctica de designar en los más altos cargos del servicio diplomático a personal inidóneo, estableciendo unos requisitos mínimos que incluyan cuando menos conocimientos y/o experiencia en materia de diplomacia y/o relaciones exteriores con el fin que sean adecuadamente representados los intereses del Estado así como que se brinde una adecuada protección y asistencia a los Colombianos en el exterior, a fin de que la Carrera Diplomática y Consular se adecúe verdaderamente a un régimen especial y jerarquizado, basado en el mérito, privilegiándose su ingreso mediante concursos públicos.

Al respecto se considera, que estas pretensiones, son propias de la acción electoral, desdibujando el objeto del presente medio de control, que tiene como fin la protección de derechos colectivos e intereses colectivos, evitar el daño contingente, y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración, o agravio sobre derechos o restituir las cosas a su estado natural cuando fuere posible.

El legislador al estudiar y regular el medio de control electoral, en el artículo 139 de la Ley 139 de la Ley 1437 de 2011, estableció lo siguiente:

“[...]

*Artículo 139. Nulidad electoral:*

*(...)*

*En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 471 de 1998.*

*[...]”*

Se infiere de la norma, que los actos de nombramientos constituyen actos administrativos de naturaleza electoral, que no puede ser susceptibles de ser controvertidos mediante el mecanismo constitucional de protección de los derechos e intereses colectivos.

En tal sentido, es la acción electoral por medio de la cual se pueden dirimir tales controversias, en tanto, no corresponde a esta jurisdicción a través del presente medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, hacer control de legalidad respecto de los nombramientos o designaciones en la carrera diplomática, ni ordenar al ejecutivo abstenerse de expedir actos de nombramientos o designar funcionarios en la carrera diplomática, ya que es este quien previa verificación de requisitos legales le corresponde su expedición.

En ese orden de ideas, se deberán adecuar las pretensiones de la demanda, conforme los fines establecidos del presente medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, establecidos en la Ley 472 de 1998, *“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”*. toda vez que del análisis de la situación fáctica planteada, se desprende además que el fondo de las pretensiones descritas, buscan la protección de derecho individuales y no colectivos.

Por lo anterior, el Despacho procederá a inadmitir la demanda, para que sea corregida por el accionante en el término de tres (3) días, so pena de rechazo de la misma, tal como lo prevé el inciso 2.º del artículo 20 de la Ley 472 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Despacho

PROCESO No.: 25000-23-41-000-2022-00702-00  
MEDIO DE CONTROL PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS  
DEMANDANTE: HERMANN GARRIDO PRADA  
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ASUNTO: INADMITE DEMANDA

5

## RESUELVE

**PRIMERO: INADMÍTASE** la demanda presentada por el señor **HERMAN GARRIDO PRADA**, para que sea corregida en el término de tres (3) días, so pena de rechazo de la misma, según lo expuesto en la parte motiva

**SEGUNDO: COMUNÍQUESE** esta decisión a los correos electrónicos señalados por la parte actora para efectos de notificaciones.

**TERCERO:** Vencido el término, **INGRÉSESE** el expediente al Despacho para lo pertinente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE<sup>1</sup>**

(firmado electrónicamente)  
**CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO**  
Magistrada

---

<sup>1</sup> CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Doctora Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, Magistrada de la Sección Primera Subsección "A" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma electrónica SAMAI; en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN PRIMERA  
SUBSECCIÓN B**

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**Magistrado Ponente:** OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS  
**Expediente:** No. 250002341000202200758-00  
**Demandantes:** JUAN FELIPE ZAPATA ÁLVAREZ  
**Demandados:** UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Y OTRO  
**Referencia:** PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS  
**Asunto:** DENIEGA LA SOLICITUD DE URGENCIA DE MEDIDA Y ORDENA CORRER TRASLADO DE LA MISMA A LA ENTIDAD DEMANDADA

Visto el informe secretarial que antecede (documento 11 expediente electrónico), el Despacho observa lo siguiente:

- 1) El señor Juan Felipe Zapata Álvarez en ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política, demanda al Congreso de la República y a la Universidad Industrial de Santander – UIS con el fin de evitar la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, establecido en el literal *b*) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, con ocasión de la supuesta omisión de las reclamaciones efectuadas por los participantes y la contestación por parte de la universidad a las mismas de manera escueta, utilizando formatos prediseñados, desestimando de plano todas las reclamaciones realizadas dentro de la convocatoria para elección del cargo de Contralor General de la República de Colombia, periodo 2022 y 2026, desconociendo las reglas del concurso
- 2) En el Despacho del Magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, se adelanta la acción popular radicado No. **250002341000202200737-00**, demandante: Dalal Karime Dager Nieto, demandados: Senado de la República y otro, quien presentó demanda en contra del Congreso de la República – Senado de la República y Cámara de Representantes, con el fin de que se proteja el derecho colectivo a la moralidad administrativa, al



Exp. No. 250002341000202200758-00  
Actor: Jaun Felipe Zapata Álvarez  
Protección de los Derechos e Intereses Colectivos

considerar que primó el interés particular y se desconocieron los principios de la administración pública dentro del proceso para elegir al Contralor General de la República.

3) En atención a lo anterior, se ordenará que por Secretaría se remita el expediente de la referencia al Despacho del Magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, para que se estudie la integración de la presente demanda a la acción popular radicado No. **250002341000202200737-00**.

En consecuencia, se

### **R E S U E L V E:**

Por Secretaría **remítase** el proceso radicado No. **250002341000202200758**, demandante: Juan Felipe Zapata Álvarez, demandado: Congreso de la República y Universidad Industrial de Santander al Despacho del Magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón con el fin de que se estudie su integración en el proceso **250002341000202200737-00**. **Déjense** las constancias del caso.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS**  
**Magistrado**  
**Firmado Electrónicamente**

**Nota:** La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente que conforma la Subsección "B" de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de CPACA.